

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

74ª REUNIÓN — 31ª SESIÓN ORDINARIA — 27/28 DE NOVIEMBRE DE 1996

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, doctor **CARLOS F. RUCKAUF**,
y del señor presidente provisional del Honorable Senado, doctor **EDUARDO MENEM**

Secretarios: doctor **EDGARDO R. PIUZZI** y doctora **MÁTILDE DEL VALLE GUERRERO**

Prosecretarios: señor **MARIO L. PONTAQUARTO** y doctor **DONALDO A. DIB**

INVITADOS:

Señor jefe de Gabinete de Ministros, ingeniero
agrimensor **JORGE RODRÍGUEZ**
Señor subsecretario de Control Estratégico, doctor
contador **ALBERTO ABAD**
Señor secretario de Relación Parlamentaria,
ingeniero **NÉSTOR ALCALÁ**
Señor secretario de Obras Públicas y Transportes,
ingeniero **ARMANDO GUIBERT**
Señor secretario de Cultura, doctor
MARIO O'DONNELL

SENADORES PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.
AGÜNDEZ, Jorge A.
ALASINO, Augusto
ALMIRÓN, Carlos H.
AVELÍN, Alfredo
BAUM, Daniel
BAUZA, Eduardo
BERHONGARAY, Antonio T.
BITTEL, Deolindo F.
BRANDA, Ricardo A.
BRAVO, Leopoldo
CABANA, Fernando V.
CAFIERO, Antonio F.
CANTARERO, Emilio M.
COSTANZO, Remo J.
DE LA ROSA, Carlos L.
DE LA SOTA, José M.
FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.
FERNÁNDEZ MEIJIDE, Graciela
FIGUEROA, José O.
GAGLIARDI, Edgardo J.
GALVÁN, Raúl A.
GENOUD, José
GIOJA, José L.
LEÓN, Luis A.
LOSADA, Mario A.
LUDUENA, Felipe E.
MAC KARTHY, César
MAGLIETTI, Alberto Ramón
MANFREDOTTI, Carlos

MARANGUELLO, Pedro C.
MASSAT, Jorge
MAYA, Héctor M.
MELGAREJO, Juan I.
MENEM, Eduardo
MIRANDA, Julio
MOREAU, Leopoldo R. G.
ODIN, Ernesto R.
OYARZÚN, Juan C.
PEÑA de LÓPEZ, Ana M.
PRETO, Ruggero
QUINZIO, Bernardo P.
REUTEMANN, Carlos A.
RIVAS, Olijela del Valle
ROMERO FERIS, José A.
SÁEZ, José M.
SALA, Osvaldo R.
SALUM, Humberto E.
SAN MILLÁN, Julio A.
SAPAG, Felipe R.
SOLANA, Jorge D.
STORANI, Conrado H.
TELL, Alberto M.
ULLOA, Roberto Augusto
USANDIZAGA, Horacio
VAQUIR, Omar M.
VERNA, Carlos A.
VILLARROEL, Pedro G.
VILLASVERDE, Jorge A.
YOMA, Jorge R.
ZALAZAR, Horacio A.

AUSENTES. CON AVISO:

HUMADA, Julio C.
LÓPEZ, Alcides H.
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.
MENECHINI, Javier R.
PARDÓ, Angel F.

POR ENFERMEDAD:

VACA, Eduardo P.

POR SUSPENSIÓN:

ANGELOZ, Eduardo C.

que se solicita acuerdo para la designación del señor Sergio Renán como embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5º, ley 20.5157). Se aprueba. (Pág. 7290.)

6. Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la promoción del vicealmirante Jorge Enrico al grado inmediato superior con fecha 23 de octubre de 1996. Se aprueba. (Pág. 7291.)
7. Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la promoción del vicealmirante Carlos Alberto Marrón al grado inmediato superior con fecha 24 de octubre de 1996. Se aprueba. (Pág. 7291.)
8. Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la promoción del brigadier Rubén Mario Montenegro al grado inmediato superior con fecha 25 de octubre de 1996. Se aprueba. (Pág. 7292.)
9. Por indicación de la Presidencia se pasa a cuarto intermedio para constituir la Cámara en Tribunal de Juicio Político. (Pág. 7292.)
10. A moción del señor senador Branda se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley del señor senador Melgarejo y otros señores senadores por el que se establece el 16 de noviembre de cada año como Día de la Evangelización Salesiana en la Patagonia (S.-2.195/96). (Pág. 7292.)
11. A moción de la señora senadora Fernández Meijide se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley del que es autora junto con el señor senador Losada por el que se amplía el plazo previsto por el artículo 6º de la ley 24.043 y su modificatoria 24.436, sobre beneficio indemnizatorio a personas a disposición del Poder Ejecutivo en el período comprendido entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983 (S.-2.064/96). (Pág. 7302.)
12. Consideración sobre tablas del dictamen de la Cámara constituida en comisión en el proyecto de resolución del señor senador Avelín por el que se rinde homenaje a la señora Libertad Lamarque (S.-2.547/96). Se aprueba. (Pág. 7304.)
13. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales en el proyecto de ley del señor senador Sala y otros señores senadores, por el que se modifica la ley sobre reembolsos de productos que se exporten del litoral patagónico (S.-1.673/96). Se aprueba. (Pág. 7306.)
14. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General y de Familia y Minoridad en tres proyectos de ley: el primero, venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados; el segundo,

de la señora senadora Rivas; y el tercero; del señor senador Cafiero sobre el régimen de adopción (C.D.-51/94 y S.-420 y 881/95). (Pág. 7307.)

15. Informe del señor jefe de Gabinete de Ministros, ingeniero Jorge Alberto Rodríguez. (Pág. 7329.)
16. Continúa la consideración del tema al que se refiere el punto 14 de este Sumario (C.D.-51/94 y S.-420 y 881/95). (Pág. 7357.)
17. Manifestaciones de varios señores senadores con respecto al plan de labor. (Pág. 7357.)
18. Continúa la consideración del tema al que se refiere el punto 14 de este Sumario (C.D.-51/94 y S.-420 y 881/95). Se aprueba en general. Se pasa a cuarto intermedio para el día 28 de noviembre a las 15. (Pág. 7358.)
19. Apéndice:
 - I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 7373.)
 - II. Inserción. (Pág. 7373.)

— En Buenos Aires, a las 16 y 50 del miércoles 27 de noviembre de 1996:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Avelín. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Avelín. — Quisiera saber cuántos minutos más vamos a seguir esperando para obtener quórum y poder empezar la sesión.

Sr. Presidente. — El señor senador estuvo en la reunión de presidentes de bloque celebrada ayer. Todos aseguraron que iban a estar presentes hoy a las 15, pero nuestros relojes deben marcar horas diferentes...

Vamos a esperar quince minutos más para que ingresen en el recinto los señores senadores que aún no lo han hecho.

Sr. Maya. — Hace mucho tiempo que su reloj no marca la hora. (Risas.)

Sr. Presidente. — Muchas veces el suyo está adelantado, señor senador. (Risas.)

Sr. Maya. — Para compensar. (Risas.)

Sr. Presidente. — El señor secretario parlamentario ya puso el reloj en hora. Luego de esperar el lapso indicado, pasaremos lista.

— Son las 16 y 52.

— A las 16 y 55:

Sr. Presidente. — La sesión está abierta.

tida e Islas del Atlántico Sur y el mar territorial adyacente, hasta el límite reconocido por la Nación como Zona Económica Exclusiva.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Oswaldo R. Sala. — Felipe E. Ludueña. — César Mac Karthy. — Cristina E. Fernández de Kirchner. — Remo J. Costanzo. — José M. Sáez. — Juan I. Melgarejo. — Juan C. Oyarzún. — Ruggero Preto. — Carlos Manfredotti. — Jorge D. Solana.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La ley 23.018 reformada por la ley 24.490 establece el reembolso adicional para las mercaderías originadas en la región patagónica, que se exporten por los puertos ubicados en su litoral marítimo, siendo extendido el plazo de beneficio por el término de cinco años a partir del 1º de enero de 1995.

Precisamente el artículo 2º de la ley citada expresa: "El reembolso adicional dispuesto en el artículo anterior será aplicado únicamente a la exportación de mercaderías originarias de la región ubicada al sur del río Colorado que se exporten en estado natural o manufacturadas en establecimientos industriales radicados en la citada región, así como a las exportaciones de manufacturas elaboradas en establecimientos industriales radicados en la mencionada región con insumos no originarios de ésta, siempre que dicho proceso genere un cambio de posición arancelaria en la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Exportación y que la mercadería resultante, objeto de la exportación, sea consecuencia de un proceso industrial y no de una simple etapa de armado".

Es necesario evitar que interpretaciones de carácter administrativo muchas veces fundadas en razones puramente fiscalistas, alteren la concepción geográfica regional, motivo de las políticas de integración territorial.

Entender que los límites de la región patagónica terminan en la costa implica dejar de reconocer al Mar Territorial adyacente como zona originaria de la materia prima, elaborada en plantas industriales pesqueras en tierra o procesadas en buques factoría.

La actividad pesquera radicada en la Patagonia, sustentada en sus alcances sobre el Mar Territorial, fuente indiscutida y bien diferenciada de los recursos marítimos de la costa bonaerense, está siendo víctima de una ligera interpretación que generará una profunda crisis en el sector productivo, con los consiguientes efectos perjudiciales sobre la mano de obra ocupada y el impacto económico y social sobre la comunidad.

Consideramos que la aplicación de la circular 1229 de la Administración Nacional de Aduanas, de fecha 27 de agosto de 1996, está vulnerando los beneficios acordados por la mencionada ley y desconoce el ámbito natural de la población pesquera radicada en la costa patagónica.

También se ignora la realidad de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como la histórica reivindicación de los derechos argentinos sobre las patagónicas islas Malvinas, basados en la iden-

tidad geológica, geográfica y política en la consideración histórica de nuestro territorio nacional.

Por los motivos expresados y entendiendo la urgencia y necesidad de revertir los graves perjuicios ocasionados a través de la aplicación de la circular 1229 de la Administración Nacional de Aduanas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.

Oswaldo R. Sala

Sr. Presidente. — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

Sr. Sala. — Es para reiterar lo que ya ha sido tratado en este recinto sobre este tema. Este proyecto pretende corregir una interpretación errónea de los funcionarios del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y de la Aduana, por la cual extendían la limitación del territorio patagónico a la más alta marea sin tener en cuenta el litoral hasta las 200 millas marítimas. Este proyecto ha sido analizado y consensuado con todas las provincias intervinientes y con el Poder Ejecutivo, llegándose finalmente al texto que se propone para su aprobación.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

— La votación resulta afirmativa.

— En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

14

REGIMEN DE ADOPCION

Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Legislación General y de Familia y Minoridad en tres proyectos de ley: el primero, venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados; el segundo, de la señora senadora Rivas; y el tercero, del señor senador Cafiero sobre el Régimen de Adopción. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley. (Orden del Día N° 1.389.)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (PiuZZi). — (*Lee*)

Dictamen de comisiones

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Legislación General y de Familia y Minoridad, han considerado el proyecto de ley venido en revisión C.D.-51/94 y los proyectos de ley de la señora senadora Rivas (S.-420/95) y del señor senador Cafiero (S.-881/95) sobre el Régimen de

Adopción; y, por las razones que oportunamente dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1º—La adopción de menores no emancipados se otorgará por sentencia judicial a instancia del adoptante. La adopción de un mayor de edad o de un menor emancipado puede otorgarse, previo consentimiento de éstos cuando:

1. Se trate del hijo del cónyuge del adoptante. En este caso se otorgará en carácter de adopción simple.
2. Exista estado de hijo del adoptado, debidamente comprobado por la autoridad judicial.

Art. 2º—Nadie puede ser adoptado por más de una persona simultáneamente, salvo que los adoptantes sean cónyuges. Sin embargo, en caso de muerte del adoptante o de ambos cónyuges adoptantes, se podrá otorgar una nueva adopción sobre el mismo menor.

El adoptante debe ser por lo menos dieciocho años mayor que el adoptado salvo cuando el cónyuge superviviente adopta al hijo adoptado del premuerto.

Art. 3º—Se podrá adoptar a varios menores de uno y otro sexo simultánea o sucesivamente.

Si se adoptase a varios menores todas las adopciones serán del mismo tipo. La adopción del hijo del cónyuge siempre será de carácter simple.

Art. 4º—La existencia de descendientes del adoptante no impide la adopción, pero en tal caso aquellos podrán ser oídos por el juez o el tribunal, con la asistencia del asesor de menores si correspondiere.

Art. 5º—Créase el Registro Único de Aspirantes a la Adopción, el que dependerá de la autoridad de aplicación, que se determinará por vía reglamentaria.

Art. 6º—Podrá ser adoptante toda persona que reúna los requisitos establecidos en esta ley cualquiera fuese su estado civil, debiendo acreditar de manera fehaciente e indubitable, residencia permanente en el país por un período mínimo de cinco años anterior a la petición de la guarda.

No podrán adoptar:

- a) Quienes no hayan cumplido treinta años de edad, salvo los cónyuges que tengan más de tres años de casados. Aún por debajo de este término, podrán adoptar los cónyuges que acrediten la imposibilidad de tener hijos;
- b) Los ascendientes a sus descendientes;
- c) Un hermano a sus hermanos o medio hermanos

Art. 7º—El adoptante deberá tener al menor bajo su guarda durante un lapso no menor de seis meses al mayor de un año el que será fijado por el juez.

El juicio de adopción sólo podrá iniciarse transcurridos seis meses del comienzo de la guarda.

La guarda deberá ser otorgada por el juez o tribunal del domicilio del menor o donde judicialmente se hubiese comprobado el abandono del mismo.

Estas condiciones no se requieren cuando se adopte al hijo o hijos del cónyuge.

Art. 8º—Son requisitos para otorgar la guarda:

- a) Citar a los progenitores del menor a fin de que presten su consentimiento para el otorgamiento de la guarda con fines de adopción. El juez determinará, dentro de los sesenta días posteriores al nacimiento, la oportunidad de dicha citación.

La citación no será necesaria cuando el menor estuviese en un establecimiento asistencial y los padres se hubieran desentendido totalmente del mismo durante un año o cuando el desamparo moral o material resulte evidente, manifiesto y continuo y esta situación hubiese sido comprobada por la autoridad judicial. Tampoco será necesario cuando los padres hubiesen sido privados de la patria potestad, o cuando hubiesen manifestado judicialmente su expresa voluntad de entregar al menor en adopción;

- b) Tomar conocimiento personal del adoptado;
- c) Tomar conocimiento de las condiciones personales, edades y aptitudes del o de los adoptantes teniendo en consideración las necesidades y los intereses del menor con la efectiva participación del ministerio público, y la opinión de los equipos técnicos consultados a tal fin;
- d) Iguales condiciones a las dispuestas en el inciso anterior se podrán observar respecto de la familia biológica.

El juez deberá observar las reglas de los incisos a), b) y c) bajo pena de nulidad.

Art. 9º—Se prohíbe expresamente la entrega en guarda de menores mediante escritura pública o acto administrativo.

Art. 10.—El tutor sólo podrá iniciar el juicio de guarda y adopción de su pupilo una vez extinguidas las obligaciones emergentes de la tutela.

Art. 11.—Las personas casadas sólo podrán adoptar si lo hacen conjuntamente, excepto en los siguientes casos:

- a) Cuando medie sentencia de separación personal;
- b) Cuando el cónyuge haya sido declarado insano, en cuyo caso deberá oírse al curador y al Ministerio Público de Menores;
- c) Cuando se declare judicialmente la ausencia simple, la ausencia con presunción de fallecimiento o la desaparición forzada del otro cónyuge.

Art. 12 — En el inicio de adopción deberán observarse las siguientes reglas:

- a) La acción debe interponerse ante el juez o tribunal del domicilio del adoptante o el lugar donde se otorgó la guarda;
- b) Son partes el adoptante y el Ministerio Público de Menores;
- c) El juez o tribunal de acuerdo a la edad del menor y a su situación personal, oír personalmente, si lo juzga conveniente al adoptado, conforme al derecho que lo asiste y a cualquier otra persona que estime conveniente en beneficio del menor;
- d) El juez o tribunal valorará si la adopción es conveniente para el menor teniendo en cuenta los medios de vida y cualidades morales y personales del o de los adoptantes; así como la diferencia de edad entre adoptante y adoptado;
- e) El juez o tribunal podrá ordenar, y el Ministerio de Menores requerir las medidas de prueba o informaciones que estimen convenientes;
- f) Las audiencias serán privadas y el expediente será reservado y secreto. Solamente podrá ser examinado por las partes, sus letrados, sus apoderados y los peritos intervinientes;
- g) El juez o tribunal no podrá entrar o remitir los autos, pudiendo solamente expedir testimonios de sus constancias cuando sean beneficiosas para el menor a juicio del juez o tribunal de la adopción y sean requeridas por otros magistrados;
- h) Deberá constar en la sentencia que el adoptante se ha comprometido a hacer conocer al adoptado su realidad biológica.

Art. 13. — La sentencia que acuerde la adopción tendrá efecto retroactivo a la fecha del otorgamiento de la guarda.

Cuando se trate del hijo del cónyuge el efecto retroactivo será a partir de la fecha de promoción de la acción.

Capítulo II

Adopción plena

Art. 14. — La adopción plena, es irrevocable. Confiere al adoptado una filiación que sustituye a la de origen. El adoptado deja de pertenecer a su familia biológica y se extingue el parentesco con los integrantes de ésta así como todos sus efectos jurídicos, con la sola excepción de que subsisten los impedimentos matrimoniales. El adoptado tiene en la familia del adoptante los mismos derechos y obligaciones del hijo biológico.

Art. 15. — Podrá ser adoptante por adopción plena toda persona que reúna los requisitos establecidos en las disposiciones de la presente ley y no se encuentre comprendida en sus impedimentos.

Cuando la guarda del menor se hubiese otorgado durante el matrimonio y el período legal se completara

después de la muerte de uno de los cónyuges podrá otorgarse la adopción al viudo o viuda y el hijo adoptivo lo será del matrimonio.

Art. 16. — Sólo podrá otorgarse la adopción plena con respecto a los menores:

- a) Huérfanos de padre y madre;
- b) Que no tengan filiación acreditada;
- c) Cuando se encuentren en un establecimiento asistencial y los padres se hubieran desentendido totalmente del mismo durante un año o cuando el desamparo moral o material resulte evidente, manifiesto y continuo, y esta situación hubiese sido comprobada por la autoridad judicial;
- d) Cuando los padres hubiesen sido privados de la patria potestad;
- e) Cuando hubiesen manifestado judicialmente su expresa voluntad de entregar al menor en adopción.

En todos los casos deberán cumplirse los requisitos previstos en los artículos 7º y 8º.

Art. 17. — El hijo adoptivo llevará el primer apellido del adoptante, o su apellido compuesto si éste solicita su agregación.

En caso que los adoptantes sean cónyuges, a pedido de éstos podrá el adoptado llevar el apellido compuesto del padre adoptivo o agregar al primero de éste, al primero de la madre adoptiva.

En uno y en otro caso podrá el adoptado después de los dieciocho años solicitar esta adición.

Si la adoptante fuese viuda cuyo marido no hubiese adoptado al menor, éste llevará el apellido de aquélla, salvo que existieran causas justificadas para imponerle el de casada.

Art. 18. — Después de acordada la adopción plena no es admisible el reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos, ni el ejercicio por el adoptado de la acción de filiación respecto de aquéllos, con la sola excepción de la que tuviese por objeto la prueba del impedimento matrimonial del artículo 14.

Art. 19. — El adoptado tendrá derecho a conocer su realidad biológica y podrá acceder al expediente de adopción a partir de los dieciséis años de edad.

Capítulo III

Adopción simple

Art. 20. — La adopción simple confiere al adoptado la posición del hijo biológico; pero no crea vínculo de parentesco entre aquél y la familia biológica del adoptante, sino a los efectos expresamente determinados en esta ley.

Los hijos adoptivos de un mismo adoptante serán considerados hermanos entre sí.

Art. 21. — El juez o tribunal, cuando sea más conveniente para el menor o a pedido de parte por motivos fundados, podrá otorgar la adopción simple.

Art. 22. — Los derechos y deberes que resulten del vínculo de sangre del adoptado no quedan extinguidos por la adopción con excepción de la patria potestad,

inclusive la administración y usufructo de los bienes del menor que se transfieren al adoptante, salvo cuando se adopta al hijo del cónyuge.

Art. 23. — La adopción simple impone al adoptado el apellido del adoptante, pero aquél podrá agregar el suyo propio a partir de los dieciocho años.

La viuda adoptante podrá solicitar que se imponga al adoptado el apellido de su esposo premuerto si existen causas justificadas.

Art. 24. — El adoptante hereda *ab intestato* al adoptado y es heredero forzoso en las mismas condiciones que los padres biológicos; pero ni el adoptante hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia biológica ni ésta hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia de adopción. En los demás bienes los adoptantes excluyen a los padres biológicos.

Art. 25. — El adoptado y sus descendientes heredan por representación a los ascendientes de los adoptantes, pero no son herederos forzosos. Los descendientes del adoptado heredan por representación al adoptante y son herederos forzosos.

Art. 26. — Es revocable la adopción simple:

- a) Por haber incurrido el adoptado o el adoptante en indignidad de los supuestos previstos en el Código Civil para impedir la sucesión;
- b) Por haberse negado alimentos sin causa justificada;
- c) Por petición justificada del adoptado mayor de edad;
- d) Por acuerdo de parte manifestado judicialmente, cuando el adoptado fuera mayor de edad.

La revocación extingue desde su declaración judicial y para lo futuro todos los efectos de la adopción.

Art. 27. — Después de la adopción simple es admisible el reconocimiento del adoptado por sus padres de sangre y el ejercicio de la acción de filiación. Ninguna de estas situaciones alterará los efectos de la adopción establecidos en el artículo 22.

Capítulo IV

Nulidad e inscripción

Art. 28. — Sin perjuicio de las nulidades que resulten de las disposiciones del Código Civil:

1. Adolecerá de nulidad absoluta la adopción obtenida en violación de los preceptos referentes a:

- a) La edad del adoptado;
- b) La diferencia de edad entre adoptante y adoptado;
- c) La adopción que hubiese tenido un hecho ilícito como antecedente necesario, incluido el abandono supuesto o aparente del menor proveniente de la comisión de un delito del cual hubiera sido víctima el mismo y/o sus padres.

El juez o tribunal en todos los casos deberá valorar el interés superior del menor.

- d) La adopción simultánea por más de una persona salvo que los adoptantes sean cónyuges;
- e) La adopción de descendientes;
- f) La adopción de hermanos y de medio hermanos entre sí.

2. Adolecerá de nulidad relativa la adopción obtenida en violación de los preceptos referentes a:

- a) La edad mínima del adoptante;
- b) Vicios del consentimiento.

Art. 29. — La adopción, su revocación o nulidad deberán inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Capítulo V

Efectos de la adopción conferida en el extranjero

Art. 30. — La situación jurídica, los derechos y deberes del adoptante y adoptado entre sí, se regirán por la ley del domicilio del adoptado al tiempo de la adopción, cuando ésta hubiere sido conferida en el extranjero.

Art. 31. — La adopción concedida en el extranjero de conformidad a la ley de domicilio del adoptado, podrá transformarse en el régimen de adopción plena establecida por la presente ley.

Capítulo VI

Disposición transitoria

Art. 32. — En los casos en que hubiese guarda extrajudicial anterior a la entrada en vigencia de la presente ley, el juez podrá computar el tiempo transcurrido en guarda conforme al artículo 7º.

Art. 33. — Derógase la ley 19.134 y sus modificaciones.

Art. 34. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 22 de octubre de 1996.

Ricardo A. Branda. — Fernando V. Cabana, — Augusto J. M. Alasino. — Bernardo P. Quintao. — Jorge A. Villaverde. — Olijela del Valle Rivas. — Jorge R. Yoma. — Horacio A. Zalazar. — José Genoud. — Antonio T. Berhongaray. — Pedro G. Villarroel. — Juan C. Oyarzán.

En disidencia parcial I:

Cristina E. Fernández de Kirchner.

En disidencia parcial II:

Julio A. San Millán.

En disidencia parcial III:

Graciela Fernández Meijide.

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

Señor presidente:

Las comisiones de Legislación General y de Familia y Minoridad han considerado el proyecto de ley venido en revisión y los proyectos de ley de la señora senadora Rivas y del señor senador Cafiero, sobre el instituto de la adopción, y en ejercicio de la facultad de revisión han efectuado reformas a la sanción de la Honorable Cámara de Diputados:

A efectos de una mayor comprensión de las modificaciones incorporadas por este Senado, las mismas se fundamentan en los argumentos que se detallan a continuación:

1º—En el artículo 1º se suprime la edad de catorce años y se reemplaza por la verificación que el juez debe efectuar respecto al estado de hijo del adoptado.

El fundamento de la presente modificación obedece a que al limitarse la edad del menor a catorce años quedarían excluidos aquellos menores que superen esta edad configurándose así un hecho arbitrario, razón por la cual se ha considerado más equitativo que dicho estado sea debidamente comprobado por la autoridad judicial.

2º—En el artículo 3º se agrega, como segundo párrafo, el primer párrafo del artículo 9º de la ley 19.134 el que se ha considerado importante no excluir del texto. Así se establece que, si se adoptara a varios menores, todas las adopciones serán del mismo tipo. De esta manera se equipara el status de las adopciones evitando diferencias entre los hijos adoptivos.

3º—Se incorpora como artículo 5º la creación del Registro Único de Aspirantes a la Adopción.

La finalidad de esta creación radica en que todos los aspirantes a la adopción tengan las mismas posibilidades, unificándose las diversas solicitudes que se registren a nivel nacional respecto a los peticionantes. Asimismo, se establece que sea respetado indefectiblemente el orden cronológico de la inscripción de los aspirantes a la adopción, evitando de este modo todo tipo de maniobras y dilaciones absolutamente injustas en el trámite tal como ocurre en nuestros días.

4º—En el artículo 6º se modifica el tiempo de residencia mínima de los aspirantes a la adopción, el que se eleva a cinco años. El o los adoptantes deben acreditar al momento del pedido de la guarda este plazo, garantizándose así una mayor seguridad al procedimiento de la guarda y de la futura adopción.

Esta modificación apunta a evitar que personas extranjeras, consignando domicilios falsos o transitorios, puedan acceder a la adopción de menores con la finalidad de llevarlos al exterior. Se ha considerado especialmente esta situación ya que con mecanismos como los existentes y los que agravados mediante la entrega de menores en guarda por escritura pública o acto administrativo, configuran un tráfico de menores, el que sin lugar a dudas este texto legal intenta impedir.

5º—En el artículo 7º se agrega un tercer párrafo, mediante el cual se determina que será competente para otorgar la guarda el juez del lugar donde judicialmente se hubiere comprobado el abandono del menor.

Se trata de evitar conflictos en materia de competencia entre el juez del domicilio del menor y el del lugar donde el mismo fue abandonado.

6º—En el artículo 8º se reemplaza la palabra "padres" por la de "progenitores", considerando más apropiado este término.

En el segundo párrafo se agrega que no será necesaria la citación de los padres cuando el menor estuviera en un establecimiento asistencial y los mismos se hubieran desentendido totalmente de éste durante un año.

Este plazo puede reducirse cuando el desamparo moral o material del menor resulte evidente, manifiesto y continuo y esta situación hubiera sido comprobada por la autoridad judicial. Ello sin perjuicio de la tarea que el juez deberá llevar a cabo al valorar los supuestos de incapacidad temporaria u otro impedimento de los padres para comunicarse con su hijo.

Se agregan los términos "manifiesto y continuo" con el propósito de responder a la necesidad de evitar que algunos padres coloquen a sus hijos en centros asistenciales y antes del vencimiento del plazo de un año interrumpen con su presencia este plazo. De este modo, se impide que, mediante este accionar, los menores queden en una constante situación de desamparo y que el juez se encuentra imposibilitado de resolver con el texto legal vigente.

Al final del segundo párrafo se agrega que tampoco será necesaria la citación de los progenitores cuando éstos hubiesen manifestado judicialmente su expresa voluntad de entregar al menor en adopción. Este párrafo estaba contemplado en el inciso c) del artículo 11 de la ley 19.134 y se ha considerado necesario su incorporación.

Asimismo se agrega que el juez con la finalidad de otorgar la guarda deberá dar efectiva participación al Ministerio Público el que es parte en el trámite de adopción.

Mediante esta incorporación se otorga al Ministerio Público un mayor control de legalidad y una efectiva participación jurisdiccional.

Se establece un estricto procedimiento para otorgar a los menores en guarda. Si bien se agiliza el trámite con miras a la adopción, no por ello se deja de lado el efectivo cumplimiento de todos los requisitos que en forma taxativa establece la ley con esa finalidad.

7º—Se agrega el artículo 9º mediante el cual se prohíbe en forma expresa la entrega de los menores en guarda, ya sea por escritura pública o acto administrativo.

A partir de la sanción de esta ley, será únicamente el juez o tribunal quien disponga la entrega de menores en guarda.

Esta nueva disposición tiene como principal objeto el desalentar e impedir la entrega de menores, que en forma absolutamente fraudulenta y en infracción a normas legales se lleva a cabo en nuestro país. Esta modificación tiene como principal fundamento evitar el tráfico de niños.

8º—En el artículo 11 se establece que las personas casadas sólo podrán adoptar si lo hacen conjuntamente.

Dentro de la excepciones a esta reg'a, se agrega el inciso c) que determina que un solo cónyuge podrá adoptar cuando se declare judicialmente la ausencia simple, la ausencia con presunción de fallecimiento o la desaparición forzada del otro cónyuge.

9º.—En el artículo 12 se agrega al inciso c) que el juez, dentro del trámite de adopción deberá observar ciertas reg'as. Se agrega que el juez o tribunal, de acuerdo a la edad del menor y a su situación personal, oír personalmente al mismo si lo juzga conveniente, conforme al derecho que lo asiste. Este agregado tiene como principal fundamento que el juez o tribunal tome contacto directo con el menor a fin de llevar a cabo una evaluación adecuada y completa de la situación del mismo, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

De igual modo, en el inciso d) del mismo artículo se agrega que el juez o tribunal deberá tener en consideración la diferencia de edad entre el adoptante y el adoptado. Con esta modificación se intenta evitar que exista una gran diferencia de edad entre hijo adoptivo y adoptante que evidencien la existencia del vínculo adoptivo.

10.—En el artículo 14 se agrega que la adopción plena es irrevocable. Esta disposición se encuentra en la ley vigente y no existen motivos para proceder a su exclusión.

Se excluye el párrafo que expresaba: "sólo podrá ser revocada por sentencia judicial por las causales establecidas en el artículo 307 del Código Civil".

Esta supresión obedece a que se agrega al primer párrafo de este artículo que "la adopción plena" es irrevocable y que confiere al adoptado una filiación que sustituye a la de origen. En consecuencia, el mencionado párrafo resultaba redundante.

11.—En el artículo 16 se enumeran taxativamente los casos en los que podrá otorgarse la adopción plena.

Si bien algunos de éstos coinciden con los establecidos en el artículo 8º respecto de la guarda, se ha considerado conveniente reiterarlos.

12.—En el artículo 20 se agrega un segundo párrafo extraído del artículo 20 de la ley 19.134 que dice que: "los hijos adoptivos de un mismo adoptante serán considerados hermanos entre sí".

Con esta inclusión se pretende evitar diferencias que pueden ser perjudiciales para los hijos adoptivos.

13.—Dentro de los supuestos de nulidad absoluta de la adopción, en el artículo 28, inciso c), se contempla el caso de adopción de menores que tengan como antecedentes necesarios un hecho ilícito. Se establece que en estos casos el juez o tribunal deberá valorar exhaustivamente el interés superior del menor.

Este artículo contempla los supuestos de las adopciones que se realizaron con aquellos menores cuyos padres fueron víctimas de delitos o donde los mismos menores fueron víctimas, como por ejemplo los nacidos en cautiverio o los que fueron sustraídos de su familia de origen durante la última dictadura militar.

La comisión agrega este segundo párrafo, que tiene como principal fundamento que sean respetados y considerados los intereses del menor en situaciones conflictivas como las que se plantean en este inciso.

Nadie puede desconocer los casos en que después de largos años de convivencia con los "supuestos" padres, luego acusados de haber obtenido a ese menor en forma ilícita se ha procedido a "separar" al mismo de esa familia para entregarlo a su familia biológica, con el consiguiente daño psicológico que ello implica para el menor.

Esta problemática de carácter social debe contemplarse en cada caso concreto, y fundamentalmente el objeto de esta reforma es que el juez deba escuchar personalmente al menor y evaluar exhaustivamente la situación, para que de esta forma en su resolución se contemple el interés superior del mismo.

Se agrega, asimismo, en el inciso f) de este artículo el supuesto que contempla la nulidad de la adopción cuando se realiza entre hermanos y medio hermanos.

Por los motivos expuestos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

Ricardo A. Branda.

Disidencia del señor senador Julio Argentino San Millán al dictamen de comisión producido respecto del C.D.-51/94, S.-420/95 y S.-881/95

Sustitúyese el inciso d) del artículo 12 del dictamen de comisión por el siguiente:

El juez o tribunal valorará si la adopción es conveniente para el menor teniendo en cuenta los medios de vida y cualidades morales y personales del o de los adoptantes, así como la diferencia de edad entre adoptante y adoptado. Tendrán preferencia para el otorgamiento de la adopción los matrimonios legalmente constituidos y, en su defecto, las uniones de hecho que acrediten una convivencia continuada no menor a los cinco (5) años a la fecha de solicitud de la adopción.

Julio A. San Millán.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La disidencia que se presenta tiene su origen en un precepto que, actualmente, resulta universalmente reconocido, cual es que lo que se procura mediante el instituto de la adopción es, fundamentalmente, el beneficio del menor dado en adopción.

A esos efectos es que se entiende que un hogar conformado por un padre y una madre con el viso de continuidad temporal que cabe presumir de un matrimonio legalmente constituido o, a falta de éste, de una unión de hecho con cierta estabilidad previa, constituyen un mejor ámbito de contención y afecto para que el niño pueda desarrollarse plenamente.

Y no se entienda que la modificación que se pretende introducir se encuentra imbuida de un carácter excluyente ni discriminatorio pues, lo que se procura, es establecer un orden de preferencia aplicable a determinadas situaciones de hecho y de derecho en las que el juez se encuentra, por un lado, frente a un niño en condiciones de ser otorgado en adopción y, por el otro ante un listado de adoptantes.

De otro lado, distintas condiciones de hecho del menor contempladas por la ley, así como la inexistencia de matrimonios o uniones de hecho con vocación de adopción, viabilizan la posibilidad de ser adoptantes para cualquier persona que cumpla con el resto de los requisitos legales, de manera que nadie está quedando excluido, ya que, insisto, lo que se establece es una preferencia que tiene en vista el beneficio del menor a la luz de la valoración que, en última instancia, deberá hacer el juez interviniente.

Julio A. San Millán.

Disidencia parcial de la senadora Graciela Fernández Meijide en relación al dictamen de la Comisión de Legislación General y Familia y Minoridad del Honorable Senado de la Nación

Al proyecto de ley de Régimen de Adopción

Señor presidente:

Quiero expresar mi apoyo en general al dictamen de la Comisión de Legislación General y Familia y Minoridad, referido al proyecto de ley venido en revisión sobre Régimen de Adopción C.D.-51/94, pero voy a sostener en la votación en particular, disidencias en puntos vitales que deberían ser incorporados al texto que se apruebe.

La sociedad hace tiempo que viene reclamando un cambio legislativo en lo referente a la adopción de niños, por eso es importante la pronta sanción de esta ley. Ya me ocupé de este tema, presentando un proyecto en la Cámara de Diputados, centrando el interés en el niño.

El problema al que nos enfrentamos los legisladores, consiste en cómo simplificar su trámite sin que ello implique cercenar los derechos del niño, de su familia de origen, de los adoptantes, ni otorgar menor tiempo del que precisan para su adaptación el niño o niña y su adoptante.

Debemos tener en cuenta que existen tres sujetos: el niño, la familia biológica y los adoptantes.

La adopción debe facilitarse y simplificarse, pero también debe controlarse adecuadamente con el objeto de que pueda desempeñar su función social.

El interés primordial que debe primar es el del niño, quien al carecer de un ámbito familiar deberá ser incorporado a otro, que aparece como tal.

La adopción resulta entonces ser el medio más satisfactorio para integrar a aquellos chicos que no tienen una familia natural o cuyos padres han perdido la patria potestad, a un nuevo grupo familiar.

Queda claro que en la adopción el bien jurídico tutelado lo constituye primordialmente la infancia que carece de un entorno familiar.

La ley 19.134, del año 1971, vigente en la actualidad, si bien resultó adecuada para regular esta problemática, en estos momentos precisa ser *aggiornada* y adecuada a la realidad de nuestros días. Fundamentalmente en todo aquello que se refiere a preervar el derecho a la identidad del adoptado, a la prohibición de otorgar la guarda por un medio distinto que el judicial, a flexibilizar sus requisitos y asegurar un con-

sentimiento de los padres biológicos libre y consciente, con conocimiento de las implicancias de su decisión.

La realidad social debe estar contemplada en el derecho, de allí la labor esencial, de quiénes intervenimos en la sanción de normas generales, por el riesgo que implica legislar institutos sin conocer la experiencia y tener en cuenta las consecuencias de las decisiones que se adopten. No podemos, ni debemos tomar medidas o reformas sin un previo análisis de la situación real, concreta y de las consecuencias que se derivarán de las reformas introducidas.

En este sentido, en el artículo 8º, en el cual se establecen una serie de recaudos para otorgar la guarda, se ordena en el inciso a) la citación de los progenitores del niño a fin de que presten su consentimiento para el otorgamiento de la guarda con fines de adopción, y que "el juez determinará, dentro de los sesenta días posteriores al nacimiento, la oportunidad de dicha citación".

Ahora bien, con la redacción que tiene el párrafo señalado, el juez va a determinar discrecionalmente la oportunidad de dicha citación.

Esta citación es importante, y yo diría fundamental, debido a que le otorga seguridad jurídica a la guarda. Los padres biológicos deben dar un consentimiento conociendo las consecuencias que tiene el mismo, la finalización de la patria potestad. Es decir, que todo progenitor que se encuentre en situación de proceder a la entrega de su hijo, debe recibir el apoyo adecuado para entender las implicancias de su decisión.

Es importante entender que durante el puerperio la mujer puede no comprender totalmente el desenlace de sus actos, muchas veces se encuentra en una situación psicológica que no le permite decidir libremente. Por ello, en el caso de recién nacidos, dicho consentimiento debe darse pasados los cuarenta y cinco días del nacimiento.

El consentimiento dado, de manera adecuada, constituye una garantía obviamente para los adoptantes, toda vez que una guarda dada en esas circunstancias es irrevocable.

Uno de los puntos que más se cuestiona de la ley 19.134 es la discrecionalidad del juez para citar a los padres biológicos del menor durante el juicio de adopción. Por ello, la modificación del Régimen de Adopción, constituye una oportunidad para brindarles a los padres biológicos la calidad de partes, citarlos a brindar su consentimiento, como requisito previo al otorgamiento de la guarda con fines de adopción. Sin embargo, este consentimiento debe ser dado luego de los cuarenta y cinco días del nacimiento del bebé.

Por todo lo expuesto, el texto que propongo aprobar en lugar del artículo 8º, inciso a), párrafo primero, es el siguiente: "Citar a los progenitores del niño a fin de que presten su consentimiento para el otorgamiento de la guarda con fines de adopción, una vez transcurridos cuarenta y cinco días del nacimiento del niño. Durante dicho período el juez implementará medidas que favorezcan la continuidad del vínculo materno-filial".

Graciela Fernández Meijide.

ANTECEDENTES

I

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados

(14 de septiembre de 1994)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1º—La adopción de menores no emancipados se otorgará por sentencia judicial a instancia del adoptante.

La adopción de un mayor de edad o de un menor emancipado puede otorgarse, previo consentimiento de éstos cuando:

1. Se trate del hijo del cónyuge del adoptante.
2. Exista estado de hijo del adoptado desde antes de los catorce años de edad.

Art. 2º—Nadie puede ser adoptado por más de una persona simultáneamente, salvo que los adoptantes sean cónyuges. Sin embargo, en caso de muerte del adoptante o de ambos cónyuges adoptantes, se podrá otorgar una nueva adopción sobre el mismo menor.

El adoptante debe ser por lo menos dieciocho años mayor que el adoptado salvo cuando el cónyuge superviviente adopta al hijo adoptado del premuerto.

Art. 3º—Se podrá adoptar a varios menores de uno y otro sexo, simultánea o sucesivamente.

Art. 4º—La existencia de descendientes del adoptante no impide la adopción, pero en tal caso aquéllos podrán ser oídos por el juez o tribunal si lo consideran necesario.

Art. 5º—Podrá ser adoptante toda persona que reúna los requisitos establecidos en esta ley, cualquiera fuere su estado civil, debiendo acreditar de manera fehaciente e indubitable, residencia permanente en el país por un período mínimo de tres años anterior a la petición de la guarda.

No podrán adoptar:

- a) Quienes no hayan cumplido treinta años de edad, salvo los cónyuges que tengan más de tres años de casados. Aun por debajo de este término podrán adoptar los cónyuges que acrediten la imposibilidad de tener hijos;
- b) Los ascendientes a sus descendientes;
- c) Un hermano a sus hermanos o medio hermanos.

Art. 6º—El adoptante deberá haber tenido al menor bajo su guarda durante un lapso no menor de seis meses ni mayor de un año que será fijado por el juez. El juicio de adopción sólo podrá iniciarse transcurridos seis meses del comienzo de la guarda. La guarda deberá ser otorgada judicialmente por el juez o tribunal del domicilio del menor. Estas condiciones no se requieren cuando se adopte al hijo o hijos del cónyuge.

Art. 7º—Son requisitos para otorgar la guarda:

- a) Citar a los padres del menor a fin de que presen su consentimiento para el otorgamiento de la guarda con fines de adopción. El juez determinará, dentro de los sesenta días posteriores al nacimiento, la oportunidad de dicha citación. La citación no será necesaria cuando el menor estuviera en un establecimiento asistencial y los padres se hubieren desentendido totalmente del mismo durante un año o cuando el desamparo moral o material resultare evidente y hubiere sido comprobado por la autoridad judicial. Tampoco será necesaria cuando los padres hubieran sido privados de la patria potestad;
- b) Tomar conocimiento personal del adoptando;
- c) Tomar conocimiento de las condiciones personales, edades y aptitudes del o de los adoptantes teniendo en consideración las necesidades y los intereses del menor y atendiendo la opinión de los equipos técnicos consultados a esos efectos y del ministerio público;
- d) Iguales condiciones a las dispuestas en el inciso anterior se podrán observar respecto de la familia biológica.

El juez deberá observar las reglas de los incisos a), b) y c) bajo pena de nulidad.

Art. 8º—El tutor sólo podrá iniciar el juicio de guarda y adopción de su pupilo una vez extinguidas las obligaciones emergentes de la tutela.

Art. 9º—Las personas casadas sólo podrán adoptar si lo hacen conjuntamente, excepto en los siguientes casos:

- a) Cuando medie sentencia de separación personal;
- b) Cuando el cónyuge haya sido declarado insano, en cuyo caso deberá oírse al curador o al ministerio público de menores si el curador fuera el cónyuge adoptante;
- c) Cuando se declare la ausencia con presunción de fallecimiento de otro cónyuge.

Art. 10.—En el juicio de adopción deberán observarse las siguientes reglas:

- a) La acción debe imponerse ante el juez o tribunal del domicilio del adoptante, o el lugar donde se otorgó la guarda;
- b) Son partes el adoptante y el ministerio público de menores;
- c) El juez o tribunal oír personalmente si lo juzga necesario al adoptando y a cualquier persona que estime conveniente en beneficio del menor;
- d) El juez o tribunal valorará si la adopción es conveniente para el menor, teniendo en cuenta los medios de vida y cualidades morales y personales del o de los adoptantes;
- e) El juez o tribunal podrá ordenar, y el Ministerio de menores requerir las medidas de prueba o informaciones que estimen convenientes;
- f) Las audiencias serán privadas y el expediente será reservado y secreto. Solamente podrá ser

examinado por las partes, sus letrados, sus apoderados y los peritos intervinientes;

g) El juez o tribunal no podrá entregar o remitir los autos, pudiendo solamente expedir testimonios de sus constancias cuando sean beneficiosas para el menor a juicio del juez o tribunal de la adopción, y sean requeridas por otros magistrados;

h) Deberá constar en la sentencia que el adoptante se ha comprometido a hacer conocer al adoptando su realidad biológica.

Art. 11. — La sentencia que acuerde la adopción tendrá efecto retroactivo a la fecha del otorgamiento de la guarda. Cuando se trate del hijo del cónyuge el efecto retroactivo será a partir de la fecha de promoción de la acción.

Capítulo II

Adopción plena

Art. 12. — La adopción plena confiere al adoptado una filiación que sustituye a la de origen. Sólo podrá ser revocada por sentencia judicial por las causales establecidas en el artículo 307 del Código Civil. El adoptado deja de pertenecer a su familia biológica y se extingue el parentesco con los integrantes de ésta así como todos sus efectos jurídicos, con la sola excepción de que subsisten los impedimentos matrimoniales. El adoptado tiene, en la familia del adoptante los mismos derechos y obligaciones del hijo biológico.

Art. 13. — Podrá ser adoptante por adopción plena, toda persona que reúna los requisitos establecidos en las disposiciones de la presente ley y no se encuentre comprendida en sus impedimentos.

Cuando la guarda del menor hubiere comenzado durante el matrimonio y el período legal, se completará después de la muerte de uno de los cónyuges, podrá otorgarse la adopción al viudo o viuda y el hijo adoptivo lo será del matrimonio.

Art. 14. — Sólo podrá otorgarse la adopción plena de los menores cuando se hayan cumplido con los requisitos de los artículos 6º y 7º.

Art. 15. — El hijo adoptivo llevará el primer apellido del adoptante, o su apellido compuesto si éste solicita su agregación. En caso de que los adoptantes sean cónyuges, a pedido de éstos, podrá agregarse al adoptado el apellido compuesto del padre adoptivo y el de la madre adoptiva. En uno y en otro caso, podrá el adoptado después de los dieciocho años solicitar esta adición. Si la adoptante fuese viuda cuyo marido no hubiese adoptado al menor, éste llevará el apellido de aquélla, salvo que existieran causas justificadas para imponerle el de casada.

Art. 16. — Después de acordada la adopción plena no es admisible el reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos, ni el ejercicio por el adoptado de la acción de filiación respecto de aquéllos, con la sola excepción de la que tuviere por objeto la prueba del impedimento matrimonial del artículo 12.

Art. 17. — El adoptado tendrá derecho a conocer su realidad biológica y podrá acceder al expediente de adopción a partir de los dieciséis años de edad.

Capítulo III

Adopción simple

Art. 18. — La adopción simple confiere al adoptado la posición del hijo biológico; pero no crea vínculo de parentesco entre aquél y la familia biológica del adoptante, sino a los efectos expresamente determinados en esta ley.

Art. 19. — El juez o tribunal, cuando sea más conveniente para el menor o a pedido de parte por motivos fundados, podrá otorgar la adopción simple.

Art. 20. — Los derechos y deberes que resulten del vínculo de sangre del adoptado no quedan extinguidos por la adopción, con excepción de la patria potestad, inclusive la administración y usufructo de los bienes del menor, que se transfieren al adoptante, salvo cuando se adopta al hijo del cónyuge.

Art. 21. — La adopción simple impone al adoptado el apellido del adoptante, pero aquél podrá agregar el suyo propio a partir de los dieciocho años. La viuda adoptante podrá solicitar que se imponga al adoptado el apellido de su esposo premuerto si existen causas justificadas.

Art. 22. — El adoptante hereda *ab intestato* al adoptado y es heredero forzoso en las mismas condiciones que los padres biológicos; pero ni el adoptante hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia biológica, ni ésta hereda los bienes que el adoptado hubiere recibido a título gratuito de su familia de adopción. En los demás bienes, los adoptantes excluyen a los padres biológicos.

Art. 23. — El adoptado y sus descendientes heredan por representación a los ascendientes del adoptante; pero no son herederos forzosos. Los descendientes del adoptado heredan por representación al adoptante y son herederos forzosos.

Art. 24. — Es revocable la adopción simple:

- Por haber incurrido el adoptado o el adoptante en indignidad en los supuestos previstos por el Código Civil para impedir la sucesión;
- Por haberse negado alimentos sin causa justificada;
- Por petición justificada del adoptado mayor de edad;
- Por acuerdo de partes manifestado judicialmente, cuando el adoptado fuera mayor de edad.

La revocación extingue, desde su declaración judicial y para lo futuro, todos los efectos de la adopción.

Art. 25. — Después de la adopción simple es admisible el reconocimiento del adoptado por sus padres de sangre y el ejercicio de la acción de filiación. Ninguna de esas situaciones alterará los efectos de la adopción establecidos en el artículo 21.

Capítulo IV

Nulidad e inscripción

Art. 26. — Sin perjuicio de las nulidades que resulten de las disposiciones del Código Civil:

1. Adolecerá de nulidad absoluta la adopción obtenida en violación a lo preceptuado respecto de:

- a) La edad del adoptado;
- b) La diferencia de edad entre adoptante y adoptado;
- c) La adopción que hubiese tenido un hecho ilícito como antecedente necesario, incluido el abandono supuesto o aparente del menor proveniente de la comisión de un delito del cual hubiere sido víctima él mismo y/o sus padres;
- d) La adopción simultánea por más de una persona si no se tratara de cónyuges;
- e) La adopción de descendientes y de hermanos y medio hermanos.

2. Adolecerá de nulidad relativa la adopción obtenida en violación de los preceptos referentes a:

- a) La edad mínima del adoptante;
- b) Vicios del consentimiento.

Art. 27. — La adopción, su revocación o nulidad deberán inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Capítulo V

Efectos de la adopción conferida en el extranjero

Art. 28. — La situación jurídica, los derechos y deberes de adoptantes y adoptados entre sí, se regirán por la ley del domicilio del adoptado al tiempo de la adopción, cuando ésta hubiere sido conferida en el extranjero.

Art. 29. — La adopción concedida en el extranjero de conformidad a la ley de domicilio del adoptado, podrá transformarse en el régimen de la adopción plena establecida en la presente ley.

Capítulo VI

Disposición transitoria

Art. 30. — En los casos en que hubiere guarda extrajudicial anterior a la vigencia de esta ley el juez podrá computar el tiempo transcurrido en guarda conforme al artículo 6º.

Art. 31. — Derógase la ley 19.134 y sus modificaciones.

Art. 32. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO R. PIERRI
Esther H. Pereyra Arandía
de Pérez Pardo.

II

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º — Modifícase el artículo 5º de la ley 19.134 de la siguiente forma:

Artículo 5º: No podrán adoptar quienes no hayan cumplido treinta años de edad, salvo los cónyuges que acrediten la imposibilidad de procrear. Tampoco podrá adoptar un abuelo a su o sus nietos.

Art. 2º — Modifícase el artículo 6º de la ley 19.134 de la siguiente forma:

Artículo 6º: El adoptante deberá hacer tenido al menor bajo su guarda durante seis meses, aunque este plazo puede ser ampliado por el juez o tribunal por resolución fundada. Esta condición no se requiere cuando se adopta al hijo o hijos del cónyuge. En el caso previsto en el artículo 11, inciso b), el organismo administrativo deberá comunicar la situación al juez para que el mismo decrete la guarda del menor si correspondiese, y cite a los progenitores a efectos de comprobar el abandono del menor.

Art. 3º — Modifícase el artículo 8º de la ley 19.134 de la siguiente forma:

Artículo 8º: Ninguna persona casada podrá adoptar sin el consentimiento de su cónyuge. Dicho consentimiento no es necesario:

- a) Para el cónyuge inocente cuando medie divorcio o separación legal por culpa del otro cónyuge;
- b) Cuando el divorcio o la separación legal ha sido por culpas concurrentes o por mutuo consentimiento;
- c) En los casos de separación de hecho sin voluntad de unirse por lapso mayor de dos años;
- d) Cuando el cónyuge ha sido declarado insano;
- e) Cuando el cónyuge ha sido declarado ausente con presunción de fallecimiento.

Art. 4º — Modifícase el artículo 11 de la ley 19.134 de la siguiente forma:

Artículo 11: El padre o la madre del menor no serán necesariamente citados al juicio, y no se admitirá su presentación espontánea en los siguientes casos:

- a) Cuando hubieran perdido la patria potestad;
- b) Cuando se hubiere confiado espontáneamente al menor a un establecimiento de beneficencia o de protección de menores público o privado por no poder proveer a su crianza y educación y se hubiera desentendido injustificadamente del mismo en el aspecto afectivo y familiar durante el plazo de seis meses;
- c) Cuando hubieren manifestado expresamente su voluntad de que el menor sea adoptado ante el órgano estatal competente o la autoridad judicial;

- d) Cuando el desamparo moral o material del menor resulte evidente por haber sido abandonado en la vía pública o sitios similares y tal abandono sea comprobado por la autoridad judicial.

Art. 5º — Agrégase como inciso c) del apartado 1 del artículo 30, lo siguiente:

- c) Igualmente adolecerá de nulidad absoluta la adopción otorgada cuando el aparente abandono del menor proviniere de un hecho ilícito o delito del cual hubieren sido víctimas el adoptado y/o sus progenitores. Los efectos de esta disposición se aplicarán igualmente a los hechos producidos con anterioridad a la vigencia de la presente. En los supuestos anunciados en este inciso no se presumirá la buena fe de los adoptantes.

Art. 6º — Modifícase el artículo 19 de la ley 19.134 de la siguiente forma:

Artículo 19: Después de acordada la adopción plena no es admisible el reconocimiento del adoptado por sus padres de sangre ni el ejercicio por el adoptado de la acción de filiación respecto de aquéllos, con la sola excepción de la que tuviere por objeto la prueba del impedimento matrimonial derivado de lo establecido en la ley 23.515.

Art. 7º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Olijela del Valle Rivas.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presente proyecto de ley modificatorio de la ley de adopción, está orientado primordialmente al objetivo de adecuar y flexibilizar este instituto como forma de mejor proveer al cuidado y beneficio de los menores posibles de ser adoptados.

La modificación propuesta al artículo 5º, bajando a treinta años la edad mínima requerida en los adoptantes, responde a las modernas tendencias legislativas y además a la idea de dotar al niño que carece de familia de padres jóvenes y activos.

En el caso de una pareja de cónyuges, que acredite la imposibilidad de procrear, consideramos innecesario mantener el lapso de 5 años de matrimonio previo para permitir la adopción. Persiguiendo el objetivo de lograr la integración de núcleos familiares, se debe tratar de subsanar los impedimentos o trabas que lo obstaculicen. Si se ha acreditado fehacientemente la imposibilidad de procrear, no existe motivo valedero para retrasar la adopción por parte de los cónyuges, privando a éstos y a los niños posibles de integrar su familia adoptiva, de la posibilidad de concretarla más rápidamente, con los beneficios que de ello derivan para todos los integrantes.

En el artículo 6º de la ley, se propicia la reducción del plazo de guarda del menor a seis meses. La aplicación práctica del instituto legal de la adopción ha demostrado que el plazo anteriormente fijado (un año),

no sólo resultaba demasiado largo para el sentir de los integrantes de la nueva familia, sino que despertaba en éstos, en la mayor parte de los casos, una gran angustia. La misma derivada de la incertidumbre respecto a si se consolidaría o no su relación una vez transcurrido ese tiempo; pero lo más grave es que en algunos casos esta situación derivaba en un esfuerzo consciente de los padres adoptivos por no ligarse afectivamente con el niño, ante el temor de que luego la adopción no se concretara.

Por otra parte, no puede desconocerse la importancia de un período de prueba preadoptiva, en el cual el niño y los adoptantes deben adaptarse y aceptarse recíprocamente.

Creemos que esto se satisface adecuadamente en un período de seis meses, sin perjuicio de que el juez o tribunal, por resolución fundada, lo extienden de considerarlo necesario en un caso específico.

En la última parte del artículo 6º propuesto, se hace referencia al artículo 11, inciso b), es decir la situación conocida generalmente como abandono.

Creemos que éste se configura cuando hay incumplimiento por parte de los progenitores, de sus obligaciones como tales, y además existe una ruptura de los lazos afectivos que los unen a sus hijos. Esto es muy difícil de acreditar, ya que se producirá generalmente en forma paulatina, con un desinterés progresivo, situación que puede prolongarse por períodos largos, incluso de años. Como la ley debe fijar un plazo para que su transcurso determine en estado de abandono del niño a los efectos de su adopción, y tratando de respetar el principio de facilitar y acelerar en lo posible el beneficio del menor, los plazos existentes, proponemos seis meses.

Si durante este tiempo ha habido un manifiesto desinterés de los padres, extenderlo aún más puede llegar a producir daños irreparables a la salud física y psíquica del menor.

Las modificaciones propuestas al artículo 8º de la ley 19.134, lo han sido al efecto de adecuar esta norma a las previsiones de la ley 23.515. Esta última distingue entre la separación simple y el divorcio vincular, de manera que ambos supuestos deben ser igualmente contemplados a los efectos de la adopción.

En el artículo 11, en el cual se regula la participación de los padres biológicos en el juicio de adopción, se han mantenido los supuestos ya existentes en el texto legal, suprimiéndose solamente la posibilidad de entregar la guarda del menor por acto notarial. Este acto es común en la actualidad, y por el mismo la madre renuncia a la patria potestad y a todo derecho personal y patrimonial sobre el menor, presente y futuro.

Entendemos que un acto de tamaña trascendencia en la vida del niño no puede ni debe hacerse de tal manera, que incluso puede facilitar la existencia de presiones morales o materiales sobre la madre para forzarla a su realización.

La guarda con fines de adopción sólo puede transmitirse ante la autoridad judicial, y en este tema surge inmediatamente la necesidad de instrumentación de los tribunales de familia ya que ellos garantizarían, en tema de tal importancia, la participación de auxiliares idóneos como asistentes sociales, psicólogos, etcétera.

Finalmente la reforma propuesta al artículo 19, tiene exclusiva finalidad de adecuarla a la urgencia de la nueva ley de matrimonio civil.

Por último, creemos útil traer a colación las recomendaciones del IX Congreso Panamericano del Niño, realizado en Caracas, Venezuela, en 1948, cuyas conclusiones fueron:

1º — La adopción debe facilitarse y simplificarse con el objeto de que pueda llegar a desempeñar, entre otros fines, la importante función social de propiciar un hogar a numerosos niños desamparados.

2º — La legislación sobre adopción debe inspirarse principalmente en el interés de los menores.

3º — En todo procedimiento de adopción, el juez deberá ser ampliamente informado por el servicio social respectivo, acerca de las cualidades personales de los padres carnales y de los peticionantes, sus condiciones de vida, su situación económica y moral, y en general, sobre todas aquellas circunstancias que sirvan para formarse un concepto.

Olijela del Valle Ricós.

—A las comisiones de Legislación General y de Familia y Minoridad.

III

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º — Modifícase el artículo 2º, segunda parte, de la ley 19.134, el que deberá quedar reelucidado de la siguiente manera:

El adoptante debe ser, por lo menos, dieciocho años mayor que el adoptado, salvo cuando el cónyuge supérstite adopte al hijo adoptado del premuerto o al hijo del cónyuge.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Antonio F. Cañero.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La ley 19.134 expresa en su artículo 2º que el adoptante debe ser por lo menos 18 años mayor que el adoptado, salvo cuando el cónyuge supérstite adopta al hijo adoptado del premuerto.

Esta norma ha sido criticada en doctrina por expresar categóricamente un principio general sentando luego una excepción que deja sin solución aceptable, supuestos que con relativa frecuencia arroja la experiencia judicial.

Frente a la norma reflexiona caracterizada doctrina: "... sea quizá el propósito de la norma contemplar la posibilidad de adopciones frente a aquellos casos en que el menor fue adoptado por uno solo de los cónyuges por no existir la diferencia de edades dispuesta por la ley respecto del otro y entonces es justo que a la muerte del adoptante no permanezca en el futuro siendo un extraño si, en los hechos, vive una relación paterna o materna que importa sea mantenida por sí misma..." (Zannoni-Orquín: *La adopción y su nuevo régimen legal*, pág. 35).

Pero no se ve por qué razón la excepción funciona solo en caso de muerte y sólo con los hijos adoptivos, y no cuando ambos cónyuges viven, ni cuando se trata de la adopción de hijos extramatrimoniales del otro cónyuge (Conf.: Mazzinghi, *Derecho de familia*, III, número 573, autor que califica el texto legal de "penosamente redactado").

En el caso de la adopción de integración, que es aquella que procura obtener quien contrae matrimonio con una persona que tiene hijos, la aplicación a ultranza del texto legal llevaría a muchos casos a resultados no sólo injustos en lo objetivo, sino francamente inconvenientes para el menor que supuestamente se quiere proteger.

Imaginemos el caso de una mujer viuda y con un hijo, que contrae nuevo matrimonio y tiene incluso hijos de esta segunda unión. Imaginemos aún más que la relación entre los medio hermanos es completamente fraternal y que luego de varios años de armónica convivencia solicita el padrastro la adopción acreditando su comportamiento como verdadero padre de familia, las óptimas condiciones de la guarda que coexistiera con su esposa y el afecto recíproco que mantiene con su hijastro.

De no acreditar la diferencia de edad de dieciocho años debiera ver frustrada su intención frente al texto lapidario de la ley y aunque le faltaran pocos meses. Y al calificar el texto de lapidario remito al artículo 30, inciso 1 b) que dispone la nulidad absoluta para la adopción obtenida en violación a los preceptos referentes a la diferencia de edad entre adoptante y adoptado.

Y el caso expresado de la madre viuda bien puede extenderse al del niño con filiación exclusivamente materna, cuya progenitora contrae matrimonio con un hombre que prefiere no recurrir al falso reconocimiento de un hijo que no ha tenido sino presentarse sinceramente al juez solicitando su adopción.

Como señala Zannoni, citando al jurista alemán Esser, cuando se aborda la interpretación de una norma vigente existen dos criterios: 1º) El de emprender una interpretación axiomática que toma como base la norma y sobre ella realiza la construcción de un silogismo; 2º) El de emprender una interpretación problemática, que parte de los problemas y los integra en las normas.

En este segundo supuesto transita la solución al tema que nos ocupa y que nos lleva a un camino que peligrosamente tiene a un lado la sanción de la nulidad absoluta por violentar la norma, y por el otro la necesidad de no hacerlo encontrando empero un resultado justo, cual sería el otorgamiento de la adopción.

Entendemos de *lege lata* que una adecuada interpretación de la Ley de Adopción así lo permitiría, pero propugnaremos, de *lege ferenda*, una reforma sustancial que no ofrezca lugar a interpretaciones distintas a a que a continuación se expone.

El segundo párrafo del artículo 2º de la Ley de Adopción contiene por un lado un principio general: que el adoptante debe ser por lo menos 18 años mayor que el adoptado; y a continuación una excepción: que ello no se requiere cuando el cónyuge supérstite adopta al hijo adoptado del premuerto.

El supuesto de la adopción del hijo biológico del cónyuge vivo es a nuestro entender más asimilable a la excepción que al principio general por lo que constituiría un supuesto no previsto. Ello por cuando toda excepción es de interpretación restrictiva y porque si bien puede esgrimirse la similitud no puede alegarse la identidad.

De ser así, y frente al silencio u omisión de la ley bien cabe la aplicación del artículo 16 del Código Civil que permitiría la analogía, y aún la aplicación de los principios generales del derecho, que son en el instituto de la adopción, eminentemente tuitivos.

Cabe agregar a ello que si la diferencia de edad entre adoptantes y adoptado tiende a procurar como toda la doctrina lo reconoce, que la relación adoptiva se asimile lo más posible a la filiatoria: ¿por qué tomar parámetros distintos en uno y otro caso siendo que la aptitud para procrear es bastante menor que 18 años?

Y para finalizar, en aras a demostrar que el facilitar la adopción de integración es precisamente el fin querido por la ley remito al artículo 6º de su articulado que no requiere tiempo de guarda cuando se adopta al hijo o hijeros del cónyuge.

Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

Antonio F. Cafiero.

Sr. Presidente. — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Branda. — Señor presidente, señores senadores: vamos a abordar un tema sensible. Desde hace doce años viene rotando por ambas Cámaras el tema de la adopción. Se han analizado temas de familia, como en los proyectos existentes en ambas Cámaras sobre paternidad responsable —en este Senado se encuentra un proyecto de ley en revisión sobre esa materia—, sobre fecundación asistida, sobre filiación, etcétera. Inclusive, debemos recordar que el divorcio era algo que parecía que no iba a recibir tratamiento. Finalmente, quedó postergado el tema de la adopción, si bien existe una legislación vigente en la materia.

Al respecto, cabe señalar que en la Argentina la adopción está regulada en la actualidad por la ley 19.134, sancionada en 1971, por algunas normas del Código Civil y por algunas leyes complementarias que contienen reglas sobre la adopción.

En segundo término, podemos decir que la legislación vigente se complementa con el conjunto normativo que integra la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que fue ratificada por la República Argentina en 1990

mediante la ley 23.849 y que fuera incorporada a nuestra Carta Magna a través de la reforma de 1994.

La adopción reconoce orígenes en legislaciones remotas, como el Código de Hammurabi y el derecho romano, que de una u otra forma apuntaban al tratamiento del desamparado o del niño.

Como decía anteriormente, desde el último retorno de la democracia, en 1983, el tema que hoy nos ocupa ya lleva doce años en el Parlamento. En efecto, el primer proyecto presentado al respecto data de mayo de 1984; su autora fue la senadora Rivas, y tuvo sanción de este Senado en 1990. En aquella oportunidad, también había dos iniciativas más, vinculadas con la adopción, que pertenecían a los senadores Luis Brasesco y Alicia Saadi de Dentone.

Señor presidente: este proyecto de ley que viene en revisión de la Cámara de Diputados tiene su origen en una iniciativa de los diputados Irma Roy, Orlando Zicarelli, Claudio Mendoza y Fernández Meijide, actualmente senadora.

A su vez, a este proyecto que se compatibilizó con una nueva iniciativa de la senadora Rivas y otra del senador Cafiero, se le introdujeron modificaciones en la comisión, momento en el cual —es bueno reconocerlo en esta oportunidad— trabajaron azeados juristas y colaboradores de las distintas bancadas.

Nosotros nos hemos propuesto subsanar algunas falencias legislativas y contribuir a la implementación de un procedimiento más apto, ágil y conveniente, recogiendo lo manifestado reiteradamente por la doctrina y la jurisprudencia, que se han venido pronunciando sobre el tema desde 1971 —fecha en la cual, si bien no tuvo origen la ley de adopción argentina, que data de 1948, sí se sancionó la ley 19.134, que derogó a la 13.252—.

En la comisión se tuvo como principal objetivo el apelar a la protección del interés del menor y, asimismo, contemplar que ante cualquier situación en donde se encuentren involucrados menores, debe tenerse siempre presente lo establecido por el artículo 3º de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, a la que hice referencia cuando hablé sobre la legislación vigente en la materia.

El artículo 3º de ese cuerpo legal dice así: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño".

Este es el artículo 3º de la Convención Sobre los Derechos del Niño.

El proceso de adopción tiene su iniciación al presentarse una situación conflictiva como la de los padres que no pueden hacerse cargo de su paternidad por diferentes motivos. Cuando se produce este conflicto se ponen en marcha los mecanismos del procedimiento.

En este proceso deben buscarse las causas que han motivado dichos conflictos o dificultades ya que se debe tener en cuenta el interés del menor, y en ese caso ese interés consistirá en no alejarlo de su grupo familiar, con la posibilidad de obtener una solución viable a ese conflicto, logrando la estabilidad del estado de esa familia. En oportunidades, la estabilidad aludida es posible; en otras no. Será recién entonces cuando se deban poner en marcha los mecanismos del procedimiento orientado a la adopción.

La adopción es sin lugar a dudas la mejor solución a alcanzar en todas aquellas circunstancias de menores en situación de desamparo. Está ampliamente demostrado que el marco afectivo familiar es fundamental para que un niño se desarrolle en forma plena, tanto física como psíquicamente. Nada puede reemplazar la seguridad, el afecto y los estímulos que brinda un hogar. Creo que es el lugar más apropiado para que este desarrollo sea pleno. El derecho de un niño a poseer una familia que se ocupe de él, que lo quiera, lo cuide y lo proteja, es prioritario e inquestionable.

El modo más apropiado es aquel que, ante cualquier otro valor, respeta los intereses del niño, no los intereses, que muchas veces se invocan, de la pareja o de aquel que tiene necesidad de volcar cariño. Primero de todo está el niño. Es decir que el objetivo primordial es darle al menor los padres que necesita. Esa paternidad será así un profundo reencuentro de amor entre padres e hijos que quedará consumada mediante la prudente y minuciosa búsqueda entre los aspirantes a la adopción, la aceptación y el conocimiento por los cuales hayan podido llegar a la formación de una nueva familia.

Es muy frecuente que los derechos-deberes que la adopción impone a los adoptantes para la satisfacción de su delicada labor sean alterados y que se sitúen en un lugar prioritario, desplazando a lo que constituye en todo momento el sustento de la adopción, a saber, que se trata de

ción jurídica a la minoridad y cuya instrumentación jurídica deber responder cabalmente a esa idea.

Es de destacar que a través de los tiempos, la adopción ha tenido diferentes clases de justificativos o motivaciones, pero en general ha sido la protección de la minoridad y, por sus características, encuentra especial justificación en los estados de desprotección o abandono en que se halle un menor.

Por supuesto que la adopción, mirada desde ese punto de vista, es una aventura tan riesgosa como gratificante, que sólo se equipara con la aventura de la paternidad responsable.

Hay quienes temen enfrentar debidamente el tema de la adopción; ella es una vivencia que debe ser tratada con la profundidad simple de la verdad en cada caso. Será entonces cuando estaremos ante un compromiso ineludible con esta temática, lamentablemente tantas veces ignorada, disfrazada o desvirtuada en su esencia.

Quiero decir que sólo los que han vivido de cerca esta experiencia, como sé que les ha pasado a algunos acá presentes, podrán conocer y comprender esta situación. La adopción es una valiosa actitud que se emprende en la vida, con amor y total desinterés.

Señor presidente: como decía debo poner de manifiesto que con frecuencia, los derechos y deberes que la adopción impone a los adoptantes para la satisfacción de su delicada labor se encuentran alterados y se sitúan en un lugar prioritario, desplazando así lo que constituye en todo momento el sustento de la adopción: la protección jurídica al menor en una situación de desamparo.

Se trata de una de las instituciones que conforman la protección jurídica a la minoridad. Su instrumentación jurídica debe responder cabalmente a esa idea.

—Murmillos en el recinto.

Sr. Presidente. — Perdóneme, senador Branda.

Los señores senadores que tienen que discutir otro tema, ¿pueden hacerlo en otro lugar que no sea el recinto?

Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Branda. — Señor presidente: para retomar este tema tan sensible a la opinión pública —como expresaba al principio de mi exposición—, quiero decir que debemos establecerlo en tres direcciones o elementos que hacen al co-

razón de esta norma o a su parte más importante —el *leibil*, como decían los juristas alemanes—.

El primer elemento es el tiempo, relacionado con la agilidad que la norma debe tener para lograr un trámite rápido —como dije en algún momento de mi argumentación—, y que pueda satisfacerse la adopción. El segundo elemento se refiere a que se elimina totalmente la tenencia por acta de escribano público o por acto administrativo. El último elemento —que es el más conflictivo y, seguramente, vamos a abordar en detalle durante la discusión en particular— se relaciona con la existencia de un registro que organice y ordene la institución en forma referencial.

Podemos decir también que es importante el requisito de cinco años de residencia en el país. De esta forma se evita alguna ventana o resquicio que facilite el tráfico de menores, tema tan caro a nuestros sentimientos. Evidentemente, podremos así evitar el traslado de menores a otros puntos del planeta.

Por todas las razones expuestas, solicito la aprobación de este proyecto.

Asimismo, pido al señor presidente la debida venia para que el señor senador Menem coinforme este proyecto tan importante. El senador por La Rioja ha entendido lo trascendental de esta norma y ha dedicado mucho tiempo a su estudio.

Sr. Presidente. — Lo hará dentro del plazo temporal correspondiente; restan cuarenta y cinco minutos.

Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: agradezco al señor presidente de la Comisión de Legislación General que me permita intervenir como miembro informante de este proyecto tan importante que se refiere a una institución trascendente del Derecho de Familia, como es la adopción.

Como bien lo ha dicho el señor miembro informante, esta institución despierta una gran sensibilidad en la sociedad por cuanto se refiere, por un lado, a solucionar el problema de la niñez desamparada, abandonada, o de aquellos que no han tenido la suerte de poseer una familia y, por otro, a la situación de aquellas personas que por distintas razones no han podido tener descendencia.

Está referida a solucionar un problema de la sociedad que, por un lado, se ve con estos extremos de hijos abandonados o desprotegidos y de aquellos que tienen la vocación de ser padres

pero, por distintas razones, no pueden ejercerla y, por otro lado, debe atender esa situación social que se crea y a la que todos quieren darle una solución.

Aquí tenemos a esta institución de la adopción, que en alguna medida puede paliar esas situaciones. Bien decían Zannoni y Orquin en un trabajo muy interesante sobre adopción que, por un lado, otorga una satisfacción espiritual al adulto privado de descendencia y, por otro, beneficia a menores, asegurándoles un hogar; además, garantiza la estabilidad social en los aspectos familiares.

Hace casi cincuenta años el diputado Benítez, al informar en la Cámara de Diputados la ley 13.252, decía: "Por una parte brinda protección al menor; por la otra, da hijos a quien no los tiene de su sangre. Atiende a ambos aspectos, colma dos vacíos, salva dos obstáculos sociales: el de una niñez desviada o en trance de desviarse y el de una paternidad frustrada o imposible".

Bien señala Oppenheim en una obra que se refiere a la adopción a fines del siglo XX, que en cada beneficiario de la adopción hay detrás un disvalor: en el caso del adoptado, del menor, el disvalor es que se trata de huérfanos, abandonados o con padres imposibilitados de poder darles atención. En el caso de los adoptantes hay un disvalor, que es la esterilidad o imposibilidad biológica de tener hijos. En cuanto a los que concibieron al hijo, el disvalor es que no pueden atenderlo o darle un hogar. Con respecto a la sociedad, el disvalor es tener chicos abandonados que no tienen un hogar.

Por eso la adopción aparece como el medio idóneo para transformar esas situaciones de disvalor y convertirlas en situaciones normales y felices para los niños y también para quienes los quieren adoptar.

Por ello resulta imperativo ajustar todos los mecanismos en materia de adopción, que si bien se vienen legislando en nuestro país, como decía, hace cincuenta años, lo importante es ir adaptándolos a las necesidades de los tiempos para procurar una mayor flexibilización, para facilitar la adopción y no trabarla, no ponerle obstáculos; hacerla más fácil, porque tiende a dar estas soluciones a las que hice referencia.

Pero también hay que tener cuidado en la legislación, para dar una verdadera protección a los intereses del niño porque, como bien recordaba recién el miembro informante, lo esencial en la adopción es proteger el interés del niño. Esto lo dice la Convención de los Derechos del Niño, que no está de más recordar, pues se trata

de normas con jerarquía constitucional que hemos incorporado en la reforma de 1994.

La Convención de los Derechos del Niño es una de las diez convenciones sobre derechos humanos que incorporamos. Ella dice en su artículo 21 que el interés primordial a defender en los países que aceptan la adopción es el de los niños.

Esto es muy interesante, porque a través de la evolución que ha tenido la institución en el tiempo, esto se remonta, como bien se recordaba, a la antigüedad. Ya en la Biblia hay algunas referencias; también las hay en el Código de Hammurabi, en tiempos de los babilonios, de los egipcios.

Pero en ese tiempo la adopción nació como una forma de perpetuar el culto familiar. No tenía nada que ver con el interés de los niños sino para perpetuar el culto familiar. Lo mismo en el Derecho Romano, en el que había dos tipos de adopciones: la *adrogatio* y la *adoptio*; una era para los *sui juris*, es decir para aquellos que no dependían de ninguna familia, y la otra para los *alieni juris*, que sí dependían de una familia. Pero siempre se tenía en cuenta la protección del culto familiar o satisfacer el interés del adoptante; nunca del adoptado. Nunca se tuvo en cuenta el interés de los niños.

En Francia también ocurría lo mismo. Se admitía la adopción pero también en beneficio del adoptante, que buscaba con esa institución un medio de transmitir su apellido y de disponer de sus bienes. Era una especie de contrato.

En ese tiempo tampoco se tenía en cuenta el interés de los niños. Por eso esta institución fue perdiendo vigencia. Si bien lo contemplaba la legislación española bajo el nombre de prolijamiento, la verdad es que en muchas épocas de la historia cayó prácticamente en desuso. Entonces, no es de extrañar que Vélez Sársfield, al redactar el Código Civil, no admitiese la adopción. El artículo 4.050 reconoce las adopciones anteriores llevadas a cabo por otras leyes, pero dice que en las nuevas no hay adopción porque se trataba de una institución que había caído en desprestigio a raíz de la forma en que era abordada por la legislación francesa y otras, que no tenían en cuenta el interés de los menores.

Pero con las guerras mundiales y la cantidad de chicos huérfanos y abandonados surge de nuevo la necesidad de esta institución. Así se empieza a regular en todo el mundo. En nuestro país también comenzó a haber proyectos, como el de 1933, de Ramón Castillo; el de 1938, de Jorge Coll, el proyecto de Código del Niño de

1941, de José Cabral; el del senador Palacios, en 1943; y la sanción de la ley 13.252, en 1948, que establece por primera vez la adopción en el ordenamiento jurídico argentino. Esta última norma se modifica recién en 1971 a través de la ley 19.134, que es la vigente actualmente, con las modificaciones introducidas por las leyes 23.264 —que como recordarán es la de filiación y patria potestad—, y 23.515, de matrimonio civil.

En la actualidad casi todos los países del mundo contemplan la adopción bajo distintas formas. Podemos mencionar veinte o treinta países, como Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia, Bolivia, Colombia, Chile, los Estados Unidos en sus distintos Estados, Paraguay, Uruguay, etcétera. Si bien algunos lo hacen en el Código Civil y otros en leyes especiales o en los códigos de familia, en todos los casos se ha incorporado a la legislación la institución de la adopción.

Como recordaba recién el señor miembro informante, hay muchos proyectos sobre esta cuestión, ya que la ley 19.134 ha cumplido un ciclo y poco a poco se vio que hay aspectos de ella que dificultan —aún está vigente— la adopción y que hay casos que requieren de otras soluciones. Tanto es así que hasta la propia jurisprudencia se ha ocupado de declarar la inconstitucionalidad de algunas normas, como lo vamos a ver a continuación.

En el tratamiento en particular vamos a hacer algunas modificaciones y observaciones al dictamen de comisión. Ahora, hablando en general, quiero rescatar cuáles son los aspectos fundamentales que contiene la reforma; es decir, los puntos centrales de la reforma que estamos encarando en materia de adopción a través del proyecto en consideración.

En primer término, uno de los aspectos fundamentales es que se garantiza la amplia intervención judicial en todas las etapas previas a la sentencia que dispone la adopción. Esto es muy importante porque así queremos terminar —como bien decía el señor senador Branda— con todas aquellas parodias de adopción con las que se viola la ley.

Aquí queremos dar garantías de que la adopción responde realmente a intereses legítimos que tienden a proteger los intereses del menor. Por eso se establece la intervención judicial en todas las etapas, desde el mismo momento de la guarda del menor. De allí que el artículo 7º diga que dicha guarda sólo puede ser otorgada por la

autoridad judicial del domicilio del menor o donde judicialmente se hubiera comprobado su abandono. De este modo, se establece un procedimiento específico para otorgar la guarda, bajo pena de nulidad que incluye, obligatoriamente, el requisito de la citación de los padres biológicos del menor; deberá asimismo tomar conocimiento de las condiciones, edades y aptitudes de los adoptados y, optativamente, el juez podrá tomar conocimiento también de las condiciones de la familia biológica.

Respecto de este tema, quiero rescatar lo siguiente. Es cierto que la adopción, cuando es plena, prácticamente desvincula al menor de su familia biológica pero la ley no puede olvidar el vínculo biológico. Por eso, el juez está obligado a citar a los padres para escucharlos, para conocerlos.

Ya veremos también otro de los aspectos centrales, que es la preservación de la identidad del menor. Por lo pronto, la intervención judicial en la guarda es fundamental.

Por eso también, como recordaba el miembro informante, estamos prohibiendo que la guarda se otorgue por escritura pública, ya que muchas veces se recurre a esa situación; por escritura pública o por autoridad administrativa se concede la guarda —en ocasiones, bajo presión a la madre— y luego pasa el tiempo y se convalida a través de una adopción.

Recuerdo haber visto en comisarías de mi provincia actas judiciales de entrega de menores. Hasta he llegado a ver actas donde se dice que se dona el menor a tal familia. Se trata de una cultura que debemos desterrar.

Es preciso que se produzca la intervención judicial, porque es la que garantiza que el derecho primordial a conservar sea el derecho de los menores.

También queremos terminar con lo que lamentablemente muchas veces conocemos a través de los diarios: me refiero al tráfico de niños. Si establecemos la intervención obligatoria de los jueces, terminaremos con esas aberrantes maniobras que desvirtúan totalmente las relaciones en el Derecho de Familia.

Esto constituye, entonces, uno de los aspectos centrales: la necesaria intervención judicial en todos los actos, desde la guarda en adelante.

Por otro lado, se reconoce expresamente el derecho del adoptado a ser oído personalmente por el juez y a conocer su realidad biológica. Este es otro aspecto fundamental contenido en la modificación que estamos proponiendo.

La ley vigente no dispone necesariamente que el juez deba conocer o escuchar al menor. En cambio, nosotros lo establecemos en la modificación a fin de que el niño tenga una participación efectiva en el proceso, al margen de su edad. Aunque se trate de un chico de cinco años, el juez debe verlo, conocerlo, debe saber de quién se trata; no puede disponer una adopción si, al menos, no ha visto al menor y conocido la situación en que se encuentra. Es decir que el juez debe tomar conocimiento personal del menor.

Por otro lado, se garantiza al menor el acceso a conocer su realidad biológica. Este es un aspecto fundamental. El menor debe conocer cuál es su verdadero origen.

Esta cuestión también está en la Convención de los Derechos del Niño que, como recordaba recién, es norma constitucional en nuestro país. El artículo 8° de la Convención de los Derechos del Niño, dice: "Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas".

Este es uno de los derechos fundamentales porque constituye una forma de completar la madurez psicológica del niño. Ningún niño podrá realmente ser maduro, íntegro si no conoce cuál es su verdadero origen. Esto vale en todos los órdenes de la vida. De lo contrario, posteriormente se le crearán traumas y problemas que no superará por más psicólogos que intervengan.

Sr. Avelín. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Presidente. — ¿Le concede la interrupción, señor senador?

Sr. Menem. — Cómo no, señor presidente.

Sr. Presidente. — Señor senador por San Juan...

Sr. Avelín. — Señor presidente: verdaderamente, estoy escuchando una argumentación muy sólida, muy abierta, muy profunda.

Quiero saber quién tiene la responsabilidad de hablar con el niño respecto de su origen, si es la autoridad judicial o son los padres adoptantes, y a qué edad debe ser realmente informado el niño sobre su auténtica identidad.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Es muy buena la inquietud del señor senador por San Juan que, como médico, habrá visto tantos casos de niños abandonados y también, como médico de provincia que habrá

actuado en el campo, habrá conocido profundamente los problemas reales de la sociedad.

El proyecto establece, y lo veremos más adelante, que en la propia sentencia exista una obligación para los adoptantes de dar a conocer su origen al niño, sin perjuicio de su derecho, para que conozca su identidad y origen biológico. Además, se establece el derecho de consultar el expediente a través del cual se realiza la adopción. Es decir que lo que ha dicho el señor senador Avelín está plenamente garantizado en el proyecto en consideración.

Sr. Cafiero. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Menem. — Sí, señor senador.

Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Cafiero. — Quiero agregar que en el momento de la discusión en particular, voy a plantear que la obligación del adoptante de decir la verdad al adoptado roza los límites de la intimidad. Me parece que roza cierto derecho que podría, de alguna manera, ser solucionado si en lugar de exigir esta condición, simplemente, se dijera que el adoptante no obstaculizará al adoptado conocer su identidad.

Sr. Presidente. — Esta Presidencia propone que se escuche la explicación en general y que este debate, que sin duda es central, se haga en el tratamiento en particular.

Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Respetando la siempre autorizada opinión del señor senador por Buenos Aires, debo decir que su proposición cambiaría la filosofía del proyecto.

La filosofía del proyecto es que el adoptante —y esto lo dice el texto— tiene la obligación de hacer conocer al adoptado su origen y lo debe decir el juez en la propia sentencia. Lo entendemos así porque no se puede ocultar la realidad biológica ya que sería falsear la verdad.

En las leyes que hemos sancionado en materia de matrimonio, filiación y patria potestad —esto fue dicho por el miembro informante—, siempre reconocimos que en todas las instituciones de familia el hilo conductor es el vínculo biológico. No lo podemos ignorar. Es cierto que hablamos de la familia afectiva, pero también debemos tener en cuenta que el adoptado no ha nacido de un repollo.

Sr. Branda. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Menem. — Sí, señor senador.

Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Branda. — El inciso *h*) del artículo 12 aclara las dudas del señor senador por San Juan.

Si bien no estamos en el tratamiento en particular, creo que es bueno dar lectura al inciso *h*) del artículo 12, independientemente del debate que pueda darse en su oportunidad.

Dice así: "Inciso *h*) Deberá constar en la sentencia que el adoptante se ha comprometido a hacer conocer al adoptado su realidad biológica".

Esto está referido a que los padres, juntamente con la asistencia psicológica y técnica, sabrán cuál es el momento de dar a conocer al niño su origen.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Es por ello que le decía al señor senador por Buenos Aires que si, admitiéramos su modificación, se cambiaría la filosofía del proyecto.

Vinculado a lo dicho por el señor senador por Formosa, es necesario decir que este proyecto admite la participación de los padres biológicos en el proceso de adopción. Es un complemento.

La ley 19.134, actualmente vigente, establece que los padres del menor no serán necesariamente citados; es más, dice que no se admitirá su presentación espontánea en los siguientes casos: por ejemplo, cuando hubieran perdido la patria potestad; cuando se hubiere confiado espontáneamente el menor a un establecimiento asistencial; cuando se hubieren desentendido injustificadamente de él por un año; cuando hubieren manifestado la voluntad de entregar el menor en adopción ante el órgano estatal competente, autoridad judicial o por instrumento público; cuando el desamparo moral o material del menor resulte evidente, o por haber sido abandonado en la vía pública o sitios similares y tal abandono sea comprobado por la autoridad judicial. Según el régimen vigente en la actualidad, los padres biológicos no deben ser necesariamente citados y cuando ocurre una de estas situaciones, directamente prohíbe la citación.

Esta disposición legal mereció la unánime reprobación de la doctrina y de la jurisprudencia más autorizada, que han declarado la inconstitucionalidad de esta prohibición de que los padres biológicos tengan participación en el juicio de adopción.

Hay numerosos fallos en la materia. Yo me voy a permitir citar uno solo pero podría mencionar muchos más. Este caso llegó a la Corte

Suprema de Justicia de la Nación y hay un fallo reciente de la Cámara Nacional en lo Civil —por eso lo cito— que indica que el solo hecho de ser padre o madre de un menor cuya adopción solicita un tercero constituye, por sí mismo, un justo y suficiente motivo para intervenir en el juicio en calidad de parte legítima y esencial pues en dicho proceso está en juego la patria potestad y el derecho filiatorio del menor, aun cuando exista expresa manifestación de abandono o de conformidad con la decisión. (Cámara Nacional Civil, Sala H, 19 de octubre de 1994, La Ley, Tomo 1995, D, página 388.)

El hecho de ser padre o madre es el título que habilita porque están en juego otras dos situaciones fundamentales del derecho civil. ¿Cuáles son? La filiación y la patria potestad. Entonces, no se puede dejar de dar intervención a los padres en el juicio de adopción.

Esta situación queda salvaguardada en este proyecto que estamos considerando hoy, cuando el artículo 8° establece, como requisito para otorgar la guarda, la obligación por parte del juez de citar a los padres del menor para que presten su consentimiento bajo pena de nulidad. Esto lo establece el dictamen que hoy estamos analizando.

Pero aquí quiero hacer una salvedad. Cuando lleguemos a la discusión en particular propondré una modificación. ¿Por qué? Porque en el dictamen quizá estamos incurriendo en el mismo error que la ley vigente en cuanto decimos que, en ciertos y determinados casos que se dan aquí, no será necesario citar a los padres del menor. Con esto, reitero, incurrimos en los mismos errores que estamos criticando y que la jurisprudencia ha establecido claramente; me refiero a la jurisprudencia denegatoria.

Nosotros decimos en el dictamen actual que los padres deben ser citados pero en ciertos casos, no. En tal sentido, voy a proponer una modificación. Esta no es una posición propia y solitaria sino que la he consultado con distinguidos especialistas, entre ellos, el doctor Zannoni, con quien oportunamente trabajamos en aquella ley de filiación de la que fui autor y en la de patria potestad. Así, hemos coincidido en que no se puede dejar de citar a los padres.

Ahora, lo que podemos hacer —y lo propondré en su momento— es que en lugar de establecer que los padres no serán citados, se indique que no se requerirá su consentimiento en tales y cuales casos. Es decir que no es necesario que los padres den el consentimiento para la guarda cuando ellos hayan abandonado al menor, o cuando se hayan desentendido de él.

Que el consentimiento no sea necesario es una cosa; pero que los padres no sean citados es algo muy distinto porque ahí estamos afectando el derecho de defensa.

Por lo expuesto, propondré que no se requiera el consentimiento pero que sí deban ser citados obligatoriamente, aun para entregar la guarda.

Sr. Salum. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Menem. — Cómo no.

Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Salum. — Señor presidente: quería hacer una consulta por un hecho que se produce constantemente. ¿Qué va a pasar en el futuro en caso de que esté presente el padre del menor que ha sido dado en adopción, como ocurre en este proyecto que estamos por aprobar? Normalmente en mi provincia sucede que algunos padres dejan abandonados a los chicos en los hospitales. Luego esos niños son dados en adopción y al tiempo, después de diez, doce o quince años, los padres vuelven y piden la tenencia. ¿Qué pasa en esa situación si es que el que ha adoptado al chico tiene que entregarlo? Hay que tener en cuenta los daños que produce este tipo de situación.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: precisamente con esta modificación que estamos proponiendo, los padres tienen que ser necesariamente citados. De esta manera vamos a evitar todos esos problemas. Ahora bien, si los padres no concurren o si concurren y se oponen en forma injustificada, está el juez para resolver. Justamente en el proyecto de ley establecemos la obligación de que en todos los casos el juez debe resolver consultando el primordial interés y derecho del menor.

Entonces, en el caso de que el padre que ha abandonado a su hijo haya sido citado en el juicio pero no ha concurrido, o habiendo concurrido se ha negado en forma injustificada, seguramente el juez mantendrá la adopción porque es lo que mejor consulta a los intereses del menor.

Sr. Presidente. — La señora senadora por Tucumán solicita una interrupción.

Sr. Menem. — Cómo no, señor presidente.

Sra. Rivas. — Señor presidente: en el proyecto que estamos tratando se establece que en el caso de niños abandonados en establecimientos asistenciales si pasa un año en que los

padres se desentendieron, el juez puede darlo en guarda con fines de adopción. Cuando el abandono es comprobado, el plazo para entregarlo en guarda puede ser menor.

Sr. Presidente. — El señor senador por Formosa solicita una interrupción.

Sr. Menem. — Cómo no, señor presidente.

Sr. Branda. — Señor presidente: los casos a los que se refiere el señor senador por Jujuy son los de tenencia precaria. Estábamos acostumbrados a tenerlos cuando se daba la guarda en forma administrativa o por acto de escritura pública. Ahí no había un plazo, como sí está determinado en este proyecto, para el inicio del proceso de adopción. Esa tenencia precaria duraba mucho tiempo. Después venían los padres, reclamaban nuevamente y se producía un conflicto entre el padre biológico y el presunto adoptante. De esa forma, en vez de guardar los intereses del niño permitíamos que se dé una nueva situación de conflicto.

Con esta nueva ley de procedimiento de alguna forma se quiere evitar este problema. Por eso es que se da vital importancia, como decía el senador por La Rioja, al tema de la resolución del juez y a la inmediatez en el conocimiento directo de la situación. El plazo de guarda se va a acortar entre seis meses a un año para que, de alguna forma, puedan entrar en el proceso de adopción durante el período de tenencia.

Sr. Presidente. — El señor senador por San Luis solicita una interrupción.

Sr. Agúndez. — Señor presidente: comprendo la buena voluntad de los miembros informantes, pero prácticamente estamos tratando el proyecto en particular. Me gustaría que se terminara el tratamiento en general. Tengamos en cuenta que a las 20 va a venir al jefe de Gabinete de Ministros y vamos a terminar a las apuradas con el debate de este proyecto.

Sr. Presidente. — Lo que pasa es que la curiosidad natural de los señores senadores es lo que está obligando a que se formulen preguntas.

Cuando se concedió la primera interrupción yo expresé que tratáramos de terminar con la consideración en general y luego pasar al tratamiento en particular del proyecto.

Por otra parte, informo al cuerpo que el señor jefe de Gabinete ya se encuentra en la casa. De manera que luego de que el senador por La Rioja termine con su alocución, pasaríamos a escuchar el informe del jefe de Gabinete de Ministros.

Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por Corrientes del Partido Liberal.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: a raíz de lo que acaba de expresar el señor presidente, no voy a decir lo que tenía pensado. Sucede que se trata de un debate muy apasionante; creo que es uno de los más interesantes que hemos tenido. Yo iba a pedir que termináramos con este asunto, para no cortarlo en dos. Pero si está el señor jefe de Gabinete de Ministros resulta imposible la proposición que iba a formular.

Tendríamos que buscar algún expediente que nos permita proseguir con este tema evitando, si es posible, cortarlo.

Sr. Presidente. — Si hay algún acuerdo entre los presidentes de bloque, escucharemos la propuesta.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: ésta es una institución fundamental del Derecho Civil. ¿Cómo vamos a cortar las preguntas o las inquietudes de los señores senadores? Esto se discute una sola vez; las preguntas enriquecen el debate.

Las intervenciones de los señores senadores están enriqueciendo el debate, no debemos ser mezquinos con el tiempo que nos tomemos. Esta es una de las leyes más importantes que estamos considerando. Entonces pediría la mayor amplitud en la exposición de los señores senadores, porque voy a proponer más adelante que estas normas sean incorporadas como artículos al Código Civil. Se trata de disposiciones que merecen toda la discusión necesaria porque realmente son de una importancia trascendental.

No estoy entrando en discusiones particulares sino que señalo cuáles son los aspectos centrales en que este proyecto innova sobre el régimen vigente en materia de adopción, que data de 1971.

Otro de los aspectos centrales es que flexibiliza las condiciones requeridas para ser adoptantes y admite limitadamente la adopción de menores emancipados y de mayores.

Se reduce la edad mínima del adoptante en cinco años respecto de la establecida en el régimen vigente. En consecuencia, permite adoptar a partir de los 30 años, de acuerdo con el artículo 6°. Esto implica introducir una flexibilización en un requisito que por otra parte no era sustancial, porque nada garantiza que a los 35 años se tenga mayor madurez que a los 30 para poder actuar como padre en el afecto; a veces

son más padres los adoptivos que los verdaderos padres biológicos.

La reducción del plazo mínimo de matrimonio de cinco a tres años para evitar el límite de 30 años de edad, resulta también razonable y tiende a estimular la adopción por parte de matrimonios jóvenes.

Asimismo, para simplificar y permitir un amplio acceso a la adopción se admite una excepción a la diferencia de edad de 18 años entre adoptante y adoptado cuando el cónyuge superviviente adopta al hijo adoptado del premuerto.

También se agrega la posibilidad de adopción de menores emancipados y mayores en los casos en que se trate del hijo del cónyuge o se detente el estado de hijo debidamente acreditado con anterioridad por autoridad judicial.

En cuanto a la adopción integrativa —es decir, cuando se adopta al hijo del cónyuge— se plantearon siempre dudas acerca de si debía ser adopción simple o plena. Indudablemente no puede ser adopción plena porque significa desvincular al menor adoptado de la familia del propio cónyuge, con lo cual se crearía una situación bastante absurda de que entra en el parentesco adoptivo del que adopta y se desvincula del parentesco biológico del marido.

Por eso se establece expresamente que en este caso sólo se admite la adopción con el carácter de simple, porque si no se desvincula jurídicamente al menor del padre y del resto de la familia.

Por último, el otro aspecto fundamental del proyecto es que declara la nulidad absoluta de las adopciones que tienen como antecedente algún hecho ilícito. No puede haber adopción que se base en un antecedente ilícito, porque estamos creando una nueva familia y ninguna familia puede tener como antecedente un hecho ilícito.

O sea que en todos aquellos casos en que se usaran artimañas, como la tenencia precaria o la falsificación de datos, se fulmina con la nulidad absoluta cualquier acto de adopción. Pero de todos modos se le atribuye al juez la facultad de valorar adecuadamente qué es lo que más le conviene al menor en cada caso.

En definitiva señor presidente estamos tratando una institución fundamental del derecho civil, una institución que ha ido evolucionando desde el vínculo puramente biológico hasta crear uno afectivo. Hoy se habla de métodos científicos que permiten superar problemas de esterilidad. Se hace referencia, por ejemplo, a la fertilización asistida y a todas aquellas novedades

científicas que impactan en el derecho y crean la necesidad de dar una respuesta.

Todavía no sabemos en qué medida estas nuevas realidades científicas que plantean problemas bioéticos van a impactar en la institución de la adopción, pero sí cabe hacer la siguiente reflexión. Cuando se recurre a estos métodos, normalmente se tiene en cuenta el interés de quien lo hace. En cambio, en la adopción, tenemos en cuenta el interés del menor.

Estamos creando un nuevo vínculo en base al afecto y a la vocación de quienes no pueden ser padres y quieren serlo. A su vez estamos permitiendo que los hijos encuentren a los padres en el afecto, ya que los padres biológicos no están en condiciones de tenerlos como verdaderos hijos.

Finalmente debo decir, señor presidente, que desde la restauración de la democracia en 1983, hemos sancionado normas fundamentales en materia de derecho civil. En efecto, dimos sanción a una nueva ley de matrimonio civil, la ley 23.515, conocida como ley de divorcio, pero realmente fue mucho más allá de eso.

Antes de ello habíamos sancionado la ley 23.264 por la que se estableció un nuevo régimen en materia de filiación. Eliminamos esa odiosa discriminación de los hijos nacidos fuera del matrimonio. Efectivamente equiparamos los derechos de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, reconociendo con esto que los hijos son de una sola categoría. También hemos establecido la patria potestad compartida.

Hoy estamos complementando aquellas reformas fundamentales del Código Civil. Por eso anticipé al señor presidente de la Comisión de Legislación General que con el aval de prestigiosos juristas voy a proponer que la nueva ley de adopción no sea una ley complementaria del Código Civil, sino que sea incorporada como norma de ese cuerpo legal. ¿Por qué? Porque en el Libro Primero, Sección segunda, del Código Civil se habla de los derechos personales en las relaciones de familia. En efecto, en esa sección se hace referencia al matrimonio, a la filiación —se dice que la filiación puede ser natural o adoptiva—, a la patria potestad y, como una evolución lógica, venimos a hablar de la adopción.

Felizmente tenemos la posibilidad material de hacer lo que propongo porque cuando sancionamos la ley de filiación y de patria potestad eliminamos una serie de artículos —desde el 310 hasta el 343— en los que se encontraban las normas referentes a la legitimación. Al cambiar

el régimen, tales normas quedaron derogadas —las derogamos expresamente—, con lo cual nos quedó un título y artículos vacantes a continuación del Título De la Patria Potestad.

Por lo expuesto propongo que a partir del artículo 310 incorporemos las normas sobre adopción. De esta forma vamos a cerrar el ciclo dentro de los derechos personales en las relaciones de familia contenido en el Código Civil y vamos a tenerlos en una secuencia lógica: matrimonio, filiación, patria potestad y adopción.

Debo decir señor presidente que me siento muy feliz de que en mi participación como senador en este cuerpo haya podido tener protagonismo en las leyes de matrimonio civil —como expositor—, de filiación y patria potestad —como autor y expositor— y ahora en el tema de adopción —como expositor— en base a la consideración de los distintos proyectos de jerarquía presentados por mis colegas y que vienen a adaptar a las necesidades actuales una norma que hace más rica, sólida y orgánica una institución fundamental de la sociedad como es la familia.

Sr. Presidente. — De acuerdo con el plan de labor aprobado, corresponde que la Cámara reciba el informe del señor jefe de Gabinete de Ministros.

Si hay asentimiento, se suspenderá el tratamiento del proyecto de ley de adopción a fin de invitar al señor jefe de Gabinete de Ministros y a sus colaboradores a ingresar en el recinto.

Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Bravo. — Señor presidente: comprendo la necesidad de interrumpir el tratamiento del tema de adopción para escuchar al señor jefe de Gabinete de Ministros. No obstante, señalo que he preparado algunas consideraciones que van en apoyo del proyecto de ley sobre adopción, en razón de que estoy totalmente de acuerdo con la iniciativa que es muy necesaria para nuestro país.

Han sido verdaderamente magníficas las distintas exposiciones hechas sobre el tema, razón por la cual sólo pido que se me permita insertar el trabajo que he preparado en el Diario de Sesiones, a efectos de que los señores senadores tomen conocimiento de él.

—El texto de la inserción solicitada es el siguiente:

Señor presidente: Consideramos el proyecto de ley sobre el Régimen de Adopción que viene en revisión de la Cámara de Diputados.

La importancia que tiene esta ley está medida por su repercusión en todos los sectores sociales, ya que debe regular la incorporación de un menor al seno de una familia, que no es su familia de sangre.

Como se ha expresado acertadamente en los fundamentos de los proyectos considerados, la ley debe contemplar los distintos intereses que representan al menor, sus progenitores y los adoptantes; sin olvidar el necesario papel que debe desempeñar el Estado, cuya misión última es velar por la mejor aplicación de este instituto.

Por lo tanto, sancionar esta ley no resulta una empresa fácil, prueba de ello son los distintos proyectos en tratamiento y la diversidad de criterios tenidos en cuenta al momento de elaborarse el dictamen.

De lo que no caben dudas es que el texto legal a sancionarse debe atender primordialmente a los intereses del menor, que carece de un ámbito familiar y que, a través de la adopción, será incorporado a otro grupo que será su familia definitiva.

En este orden de ideas, el dictamen de las comisiones de Legislación General y de Familia y Minoridad, resulta un avance en relación al texto votado en la Cámara de Diputados, sin olvidarme que las disidencias planteadas deben obtener, cuanto menos, un pormenorizado debate en mérito a la seriedad y profundidad de los planteos.

El proyecto crea un Registro Único de Aspirantes a la Adopción que, seguramente, redundará en beneficio de un mejor sistema para las familias que desean adoptar.

Pero creo necesario destacar, que el orden cronológico del registro indicado no debe ser el único parámetro a tener en cuenta al momento de la decisión final, pues existe un proceso previo al otorgamiento de la adopción en el que las familias deben ser preparadas. Y los tiempos de las familias que aspiran a adoptar son distintos en todos los casos.

Por ello, insisto, el criterio del registro cronológico de familias aspirantes debe ser considerado teniendo en cuenta los otros elementos, como ser la preparación previa del grupo familiar.

En consecuencia y siempre velando por el interés del adoptado, llegado el momento de tratar cada caso en particular, se deberán extremar los cuidados para no vulnerar no sólo el espíritu de las normas en tratamiento, sino del artículo 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño (ley 23.849), que consagra el principio que en todos los actos o medidas concernientes a menores, deberá prevalecer y se atenderá al interés superior de los niños.

Con estos breves conceptos quiero dejar sentado el sentido de mi voto en cuanto a la aprobación en general de la iniciativa en tratamiento.

Finalmente, me parece también de mucha importancia que el Poder Ejecutivo, una vez que la ley sea sancionada, le brinde una adecuada difusión; ya que de ese modo se estará alentando a formalizar adopciones que, como se dijo, resulta el medio más adecuado para integrar a aquellos niños que carecen de una familia de sangre y buscan todo lo que ello significa en la nueva familia adoptiva.

Muchas gracias.

Sr. Presidente. — Cómo no, señor senador. Oportunamente, cuando sea el momento reglamentario correspondiente someteré a votación la inserción solicitada.

lizar un estudio para analizar su concreción, también dentro de los acuerdos con el Paraguay.

Sr. Presidente. — Agradecemos la presencia del señor jefe de Gabinete de Ministros. *(Aplausos.)*

— Se retiran del recinto el señor jefe de Gabinete de Ministros y sus colaboradores.

16

REGIMEN DE ADOPCION. CONTINUACION

Sr. Presidente. — La Presidencia aclara a los señores senadores cómo va a proceder de aquí en adelante. Tengo en mi poder la lista de oradores. Técnicamente, en función de la cantidad de señores senadores anotados en ella, el tratamiento de este tema podría demandar aproximadamente seis horas. La Presidencia va a respetar la lista de oradores en general hasta que se agote y hará uso de la facultad que le fuera otorgada para pasar a cuarto intermedio esta sesión recién en ese momento.

Sr. Genoud. — ¿Me permite una interrupción, señor presidente?

Sr. Presidente. — Cómo no, señor senador.

Sr. Genoud. — El cuarto intermedio, ¿ha sido votado?

Sr. Presidente. — Sí, señor senador. Ha quedado facultada la Presidencia para pasar esta sesión a cuarto intermedio hasta mañana a las 15 cuando lo crea pertinente.

Sr. Genoud. — De acuerdo. Entonces, esta sesión continuará mañana a las 15 y 30.

Sr. Presidente. — A las 15, señor senador.

De manera que voy a agotar la lista de oradores en general. Cuando ello suceda, si no hay quórum para votar, pasaré esta sesión a cuarto intermedio hasta mañana. De manera que sería bueno que los señores senadores se queden en el recinto para expresar sus opiniones sobre el tema en tratamiento y lo hagan de la forma más sucinta posible, dentro de la consideración que merece esta cuestión.

Sr. Genoud. — Pregunto al señor presidente si se va a votar en general el proyecto de ley sobre adopción o si simplemente se van a agotar los discursos en general.

Sr. Presidente. — Si el momento en que se agote la lista de oradores hay quórum, procederé a votar el proyecto de ley en general. Esto es lo que corresponde reglamentariamente. Ustedes podrán llegar a sus propias conclusiones, teniendo en cuenta que ello puede demandar seis horas de debate.

17

MANIFESTACIONES SOBRE EL PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Moreau. — Seré muy breve, porque no quiero obstaculizar el trámite de esta sesión, menos aún cuando se está analizando un tema tan trascendente.

Simplemente, quiero anunciar —de modo tal de no sorprender a nadie, como en alguna medida nos ha ocurrido a nosotros— que terminado el tratamiento del proyecto de ley sobre adopción —hoy o mañana— vamos a solicitar la reconsideración del orden del día número 1.627, referido a reembolso por puertos patagónicos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Debo decir algo que anteriormente pasé por alto en el entendimiento de que tal vez con ello agregaba un elemento más que nos distanciaba en el afán de ir buscando resultados en los últimos días de trabajo de las sesiones ordinarias. Pero quedó flotando en el aire la idea de que nosotros, imprevisamente y abusando del número, hemos aprobado un plan de labor que nadie conocía. Ello no es así, porque ayer se acordó en la reunión de presidentes de bloque el plan de labor tal como lo votamos. La única diferencia planteada insistentemente por la Unión Cívica Radical fue el proyecto de ley vinculado con la cuestión de límites entre Catamarca y Santiago del Estero. Pero en manera alguna se modificó algo con respecto a los otros temas, no obstante lo cual, en presencia de los sacerdotes o integrantes de las órdenes salesianas, que asistieron aquí a fin de hacerse cargo de la consideración que este cuerpo iba a hacer de su labor pastoral en la comunidad argentina, quedó flotando la idea de que nosotros estábamos imponiendo un plan de labor que nadie conocía y que, de pronto, sorprendíamos en la buena fe a todos incluyendo el tratamiento de siete u ocho temas, acerca de los cuales nadie tenía conocimiento. Nada más alejado de la verdad y de la realidad, señor presidente.

Por Secretaría se leyó el plan de labor, y de acuerdo con la forma en que se lo votó, a nadie se sorprendió en su buena fe.

Sr. Presidente. — Senador Alasino: éste no es el momento para discutir este tema, ya que el debate tuvo lugar en oportunidad de considerarse el plan de labor. Si no, vamos a revivir una discusión cuando tenemos que tratar otro proyecto de ley.

Sr. Alasino. — Lo que sucede es que recurrentemente se plantea una objeción que no es cierta y no puedo dejarla pasar. Ya obvié este asunto en dos oportunidades, pero ahora se insiste nuevamente en que sorprendimos la buena fe en una votación, cuando no es así.

Sr. Presidente. — Esta cuestión la analizaremos mañana, en oportunidad de tratarse el pedido de reconsideración.

Sr. Alasino. — Acá dejo el tema, pero quiero decir que el plan de labor, y están todos los presidentes de bloque, no era desconocido por nadie.

Sr. Presidente. — Reitero que el asunto se discutirá mañana cuando se trate el pedido de reconsideración.

Sr. Genoud. — Señor presidente: no reiteraré la discusión sobre el procedimiento aplicado para aprobar el plan de labor parlamentaria, pero debo decir, avalando la posición del señor senador Moreau, que acompañaremos el pedido de reconsideración sobre la votación del proyecto de reembolsos por las exportaciones por puertos patagónicos, porque el secretario parlamentario —entiendo que involuntariamente— alteró el orden en que esta cuestión había sido acordada ayer.

Aquí tengo sobre mi banca, y seguramente también lo tendrá el presidente de la bancada justicialista, que el tema...

Sr. Presidente. — Ya señalé que este tema lo vamos a discutir mañana, cuando se debata el pedido de reconsideración.

Sr. Genoud. — Señor presidente: quiero hacer una aclaración, para que quede sentada la buena fe de nuestro planteo.

El tema vinculado con los reembolsos por las exportaciones por puertos patagónicos era posterior a la consideración del proyecto de ley sobre adopción. Yo pensaba intervenir en ese debate, para apoyar la iniciativa del senador Sala y sugerir una modificación, y tengo entendido que el señor senador por Buenos Aires iba a hacer otro tanto, pero resultó ser que durante una circunstancial ausencia nuestra, no se estaba considerando el proyecto de ley sobre adopción sino, a nuestro juicio incorrectamente, la otra iniciativa...

Sr. Presidente. — No voy a dar más el uso de la palabra.

Sr. Genoud. — Es que es así, y tengo la prueba. Se la voy a acercar...

Sr. Presidente. — Señor presidente del bloque radical: yo no le corto el uso de la palabra

a nadie, pero este tema se analizará mañana, cuando se discuta el pedido de reconsideración, de acuerdo con el artículo 146. No daré más el uso de la palabra para hacer referencia a este tema.

18

REGIMEN DE ADOPCION (Continuación)

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Luis, para hablar sobre el proyecto de ley de adopción.

Sr. Agúndez. — Señor presidente: estamos tratando uno de los proyectos de ley más importantes, más humanos, que tuvo a su consideración este Senado.

Quiero aclarar que cuando solicité la palabra, en momentos en que estaba hablando el coinformante, lo hice para organizar el debate en particular, pero creo que se me interpretó mal, creyendo que quería que se acortara el debate. Simplemente, quería hacer esta aclaración antes de comenzar a analizar el proyecto.

Señor presidente: creo que esta iniciativa, además de ser de suma necesidad, mejora considerablemente la ley de 1971. Pero debo merituar que este proyecto de ley fue tratado en la Cámara de Diputados no sólo por la comisión cabecera, que era la de Familia y Minoridad, sino también por las de Legislación General y de Justicia, lo cual no ocurrió en este Senado.

De todas maneras, no vengo por esta cuestión a oponer una objeción al tratamiento de este tema, pero sí creo que debe quedar sentado para el futuro que asuntos que tengan una compenetración importante con la incumbencia de la Comisión de Familia y Minoridad sean girados a ella para su estudio.

A raíz de esta que señalo, quiero decirle a la Presidencia que la Comisión de Familia y Minoridad no se había podido reunir para considerar —nada más y nada menos— el proyecto de ley sobre adopción. Pero la comprensión del presidente de la Comisión de Legislación General hizo posible la postergación del tratamiento y, así, tuvimos una reunión al respecto y le hicimos llegar a dicha comisión el dictamen de la Comisión de Familia y Minoridad, en donde solicitamos la mejora de la iniciativa en cuatro o cinco artículos. Ustedes podrán apreciar que aunque soy integrante de la Comisión de Familia no he suscrito el proyecto, y no porque esté decididamente en contra sino por que no tuve la posibilidad de verlo. En este momento no tenemos la posibilidad de hacer un dictamen en minoría. Pero, de todas maneras, repito, señor presi-

dente, no quiero que esto se tome como excusa o una mala interpretación. Simplemente, que de ahora en más, cuando venga un proyecto en revisión, se remita a las comisiones pertinentes.

Si nosotros pretendemos hablar de la adopción en forma aislada, sin tener la posibilidad de reunirla con los demás aspectos de la familia, creo que nos estamos equivocando. Si pretendemos hablar de la ley de adopción aislada en el tiempo, sin saber sus antecedentes y la relación social en cada uno de esos tiempos, también nos estamos equivocando. Y si nosotros pretendemos centralizar el registro de la adopción, a los efectos de proteger posibles delitos de tráfico de niños y pasar por arriba el control social, la fe pública que tienen las comunidades chicas o los estados provinciales, creo que nos estamos equivocando. Para la adopción debemos tener en cuenta todos los otros factores de derecho de familia y todas las instituciones que fueron sus antecedentes. Pero, desgraciadamente, hubo una propuesta sobre la centralización de los registros de adopción, con un registro único. Si fuese la centralización para proteger el tráfico de niños, nosotros lo aceptaríamos, pero acá también está la descentralización de las familias adoptantes y la posibilidad del niño abandonado adoptado.

Por eso creo que no era necesario hacer una nueva ley de adopción en la Argentina. Ya tenemos la ley de 1971 y creo que con dos o tres reformas fundamentales hubiéramos, seguramente, conseguido los mismos efectos que con esta nueva iniciativa.

Al analizar todo el debate parlamentario de la Cámara de Diputados, vemos que no hubo un solo diputado de ningún sector político que hablase precisamente de la centralización del registro de adoptantes como registro único. No se trató en ningún momento, y es en este Senado donde se introduce el artículo 5º. En definitiva, hemos conocido hoy, en horas de la tarde, antes de que empezara la sesión, una nueva redacción que la Comisión de Legislación General nos ha hecho llegar.

La complejidad de la ley de adopción, como bien lo han dicho los senadores que me precedieron en el uso de la palabra, es de tal importancia que del análisis profundo podemos sacar dos conclusiones totalmente disímiles. Una es que a medida que más se usa la ley de adopción podemos sacar un resultado positivo, a saber, que existiría mayor solidaridad en la República Argentina. Pero a mayor uso de la ley de adopción debemos también admitir que existe menos protección social de parte del Estado, porque no

podemos hablar de la adopción si no hablamos de abandono y no podemos hablar de abandono si no mencionamos a la pobreza. Y si hablamos de pobreza tenemos que decir que, desgraciadamente, los proyectos del Estado no han sido lo suficientemente efectivos como para cambiar uno de los flagelos más grandes que puede llegar a tener un niño, que es el abandono.

Este tema debe ser tratado, en consecuencia, con honestidad. Debemos desnudar la verdad.

Por cierto, hay Constituciones de países de América que dicen que el Estado asume el papel de parte de familia y el Ministerio Público le da el rol de verdadero fiscalizador de los derechos del niño, más allá de sus representaciones legales.

Hay muchas definiciones sobre el término "adopción". Creo que una de las más completas fue la vertida en el VII Congreso Mundial sobre los Derechos del Niño y la Familia: la adopción no es un hecho meramente jurídico; no puede pensarse ni plantearse como una medida aislada de un contexto sociocultural; si bien es cierto que responde a un ordenamiento jurídico, debe reconocérsele como un acto humano con un profundo sentido ético, emocional y social, que desborda los aspectos legales para constituirse en una institución jurídico social; de ahí que el niño tiene necesidad —que debe ser contemplada en la ley— de una forma de protección afectiva. Concluye diciendo que no es la leche sino cómo se la da lo que hace a esta diferencia fundamental de la afectividad.

Es en el sentido de desnudar la verdad sobre la adopción que debe ser tratada relacionándola —como dijimos— con el abandono. Esto es así porque en la mayoría de los casos la adopción tiene ese hecho fáctico. El abandono debe ser la máxima agresión que sucede en esta relación. Es por ello que, como regla, podríamos decir que mientras menos tiempo pase el niño entre el abandono virtual y la acogida por una figura sustituta mejor es la posibilidad de una buena relación reparatoria y más oportunidades hay de que no se presente el síndrome abandonónico.

Sabemos que existen tres soluciones para este tema. Históricamente, la primera ha sido siempre la institucionalización. La segunda, la colocación en familia. La tercera, la adopción para el chico abandonado.

Hemos tenido antecedentes no muy buenos respecto de las institucionalizaciones. Seguramente, debe haber excepciones. Pero muchas estadísticas nos dicen que un gran porcentaje de

niños institucionalizados termina posteriormente habitando las cárceles de adultos.

Las familias sustitutas o familias de colocaciones —que funcionan como aquel antiguo padrino que existía en la época de nuestra independencia y antes de que se sancionara el Código Civil— tampoco cubrían las expectativas más completas en este sentido, por existir la discriminación entre la familia legítima o biológica y aquellas personas que estaban transitoriamente en ese grupo.

La adopción bien recibida es la única que logra reparar las heridas del abandono. Porque trae la parentalidad sustituta cuando el niño es entregado de inmediato a sus padres adoptivos. Ello facilita el proceso de reparación del abandono, que será más difícil cuanto más abandono haya sufrido el niño.

El acortamiento de la guarda en seis meses en este proyecto de ley, por ejemplo, es auspicioso en ese sentido.

Pero la adopción exitosa es —como dijimos— la que constituye el mejor remedio a las lesiones del niño abandonado.

La adopción frustrada, que también se da, constituye para el niño una nueva lesión grave, de la cual la experiencia permite pensar que no se recobrará jamás completamente.

En este aspecto es importante que la judicialidad y la jerarquización de la guarda, que están contempladas en este proyecto, atenúen sus efectos.

Por ello sería deseable que en el futuro los niños adoptables fueran aquellos que quedaron abandonados sólo por alguna circunstancia que no dependiera de la voluntad o la acción de los seres humanos.

El VII Congreso Mundial de Derechos de Familia realizado en 1992 en El Salvador había recomendado al respecto las siguientes pautas, que tienen amplia vigencia en este momento, no obstante haber pasado cuatro años.

Dice que la adopción de menores, bajo cualquier forma que sea, debe ser promovida en todas las legislaciones como medio idóneo para alcanzar el bienestar recíproco de padres generosos y menores desprotegidos. Los Estados deben regular la adopción con la vista puesta en la protección de los menores y con tribunales especializados, tendientes a velar por el efectivo cumplimiento de las normas que los protegen a ellos.

Se trata de la adopción en favor del interés superior del menor. Este interés demanda buscar

una familia para un niño y no un niño para una familia.

Por ello, para cualquier regulación legislativa que se intente llevar a cabo sobre la adopción se deberá tener en cuenta estas nuevas coordenadas sociales de la actualidad y que podríamos subsumirlas en cuatro puntos: el debilitamiento de la estructura familiar en sí; la desaparición de la patria potestad responsable; las razones socioeconómicas, que la mayoría de las veces la motivan, y la masiva aparición de niños sin filiación conocida o en estado de abandono o desamparo.

Habíamos dicho que creemos que la adopción no puede ser juzgada ni analizada de una forma aislada.

El Congreso de la Nación debe al pueblo argentino un código de derecho de familia, a los efectos de una mayor sistematización de este derecho. Existen códigos y tribunales penales; códigos y juzgados civiles; códigos y tribunales de comercio. Desgraciadamente es una paradoja que en lo más fundamental de la sociedad, que es la familia, pretendamos tener tribunales de menores, que todavía no existen en todas las provincias, y no tengamos un Código de Familia para la aplicación sistemática y fundada de las normas de familia.

En ese código deberían estar regulados el matrimonio, las relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, la nulidad del matrimonio, la unión de hecho, la filiación, tanto la consanguínea como la adoptiva y, en este caso, la regulación, como en algunos países existe; por ejemplo, el Comité de Asignación, la Asesoría Postadopción, integrada por equipos técnicos y auxiliares del servicio judicial de menores.

Este código también tendría que contemplar alimentos y tutela y, por qué no, la protección integral del niño, que sería la reglamentación de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por la ley 23.349 del 90 y asumida con rango constitucional por el artículo 75, inciso 22.

Asimismo, podríamos introducir el patronato de menores, ley 10.903, donde a veces cuestiones no jurídicas, como es el abandono, han pasado a manos e instrucción de la Justicia. Cuando todo pasaba, se daba como resultado la victimización del niño que, en definitiva, es contraria precisamente a esta Convención, a esta ley ratificatoria y, fundamentalmente, a la Constitución Nacional.

Pretendo que este proyecto de ley sea analizado introduciéndosele algunas modificaciones que son secundarias, pero que en el debate en

particular vamos a plantear a fin de buscar la forma de incorporarlas al texto de la ley.

No podemos analizar una ley aislada, cuando lo principal es el Código de Familia y esa norma que algunos legisladores vamos a presentar la semana que viene, referida a la ley integral de protección del niño. Si esa iniciativa y el Código de Familia resultasen aprobados —no creo que pase más allá del año que viene—, tendremos que reformular la ley de adopción.

Si tratamos integralmente el tema, aquellas acusaciones que califican a América latina como el continente exportador de niños dejarán de tener sentido o al menos lo será por la vía de la adopción y no por la vía ilegal del tráfico.

La sociedad actual debe proponerse entrar al siglo XXI con una mentalidad nueva y abierta que termine con el abandono del niño por el hombre, que en definitiva es el abandono del hombre por el hombre.

La soledad, la pobreza, la marginación, el abandono, la violencia y la drogadicción parecen haber sido los productos del siglo XX. Que la solidaridad, la paz, la integración de las comunidades y la comprensión sean los principios con los que podamos entrar al siglo XXI.

En lo que se refiere al antecedente de la ley de adopción, debemos analizar cuatro etapas. Primero, la que comprende de 1816 a 1871, hasta la creación del Código Civil. En ese período había algunas otras instituciones sustitutas como el padrinazgo, el proahijamiento y la figura del *gradito* en la sociedad argentina. No se contaba con las posibilidades de la adopción moderna pero en definitiva eran principios que servían a los efectos de la relación entre chicos abandonados y padres generosos. Reitero: desgraciadamente en esa época no existía la costumbre de la adopción.

La segunda etapa es la que comienza con la concreción del Código Civil, donde Vélez Sársfield no regula la adopción sino que, como lo dijo el señor miembro informante, hace alusión a ella para referirse solamente a un problema de herencia en el artículo 4050. Le da una entidad de reconocimiento de derechos adquiridos pero no la legisla.

Todo esto tiene que ver con lo que decía antes, es decir, con la realidad del país. Cuando un país es próspero es muy difícil que existan chicos abandonados, pobreza y adopción. Por el contrario, cuando un país está en crisis económica y social evidentemente hay hijos abandonados —el diario de hoy lo demuestra— y nece-

sidad de dar importancia al instituto que estamos considerando.

La tercera etapa de los antecedentes es la ley 13.252, de 1948, que fue la primera ley de adopción en el país. Por lo tanto, somos un país joven por el tiempo que hace que tenemos esta institución, aunque podríamos haberlo sido más aún.

Esa norma establecía sólo la adopción simple y tenía muchas falencias porque desde que en 1948 se empezó a tratar la posibilidad de contar con la ley de adopción hasta que finalmente se la aprobó, el modernismo avanzó e hizo que quedase inmediatamente desactualizada. Por eso en 1971 se sancionó la ley 19.134, que regulaba las dos adopciones: la simple y la plena; y debo decir que en mi opinión hubiera sido suficiente con modificar esa norma —y no hacer una nueva—, por cuanto no estaba tan atrasada en relación con los acontecimientos modernos.

Considero que la iniciativa tiene aspectos muy interesantes que seguramente analizaremos cuando entremos a considerarla en particular.

No obstante, debemos reconocer que han ingresado tres proyectos relativos al tema de la adopción. Uno de ellos vino de la Cámara de Diputados; también ingresó, por separado, otra iniciativa relativa al Registro de Adoptantes para Capital Federal, cuya autoría es de la diputada Sobrino; asimismo, entró otro proyecto, también sancionado por la Cámara Baja, sobre licencia del adoptante, elaborado por la diputada Irma Roy.

Hubiera sido muy importante que estas tres iniciativas estuvieran contenidas en un solo proyecto, pero eso no pudo ser, fundamentalmente, por la iniciativa relativa al Registro de Adoptantes, porque la diputada Sobrino pensaba que esa norma sería exclusivamente para la Capital Federal.

Asimismo, aquí hubo una confusión en la Comisión de Legislación General y se incluyó el artículo 5° en la parte de disposiciones generales. Es por ese motivo que no puedo esperar al tratamiento en particular para señalar lo que sigue.

El artículo 5° de este proyecto dice, textualmente: "Créase el Registro Único de Aspirantes a la Adopción, el que dependerá de la autoridad de aplicación, que se determinará por vía reglamentaria".

Este artículo corresponde a las disposiciones generales; se refiere a un principio general de centralización. Y nosotros, que buscamos la descentralización de los problemas sociales de la Argentina hacia las autoridades locales, que hablamos tanto de la responsabilidad primaria que

deberían asumir los municipios, resulta que ahora, empezamos a centralizar estas cuestiones relativas a un tema que tiene mucha importancia en lo que respecta a cada una de las idiosincrasias de las comunidades.

Por ello, no compartimos en absoluto ese artículo ni la reforma que hace poco nos propusieron en relación con él, que dice que a los fines de esta ley, las autoridades de aplicación organizarán en el orden nacional y provincial un registro único de aspirantes a la adopción, cuyo funcionamiento se coordinará mediante convenio.

Creo que la aplicación de esa disposición es imposible. No he podido decírselo con anterioridad al presidente de la Comisión de Legislación General pero creo que lo que se propone, a todas luces, resultaría inconstitucional.

Podría decirse, tal vez, que las autoridades de aplicación podrán organizar en el orden nacional y provincial un registro único de aspirantes a la adopción, cuyo funcionamiento se coordinará... etcétera.

Sin embargo, debo decir —y no por defender al federalismo político sino por una cuestión de idiosincrasia de cada región de nuestro país— que no es lo mismo la adopción en la Capital Federal que en cada una de las provincias.

Hace pocos días, el presidente del Colegio de Abogados de mi provincia me preguntó si, en definitiva, el Senado, de vez en cuando, no estaba haciendo las veces de Concejo Deliberante para la Capital Federal.

No me animé a responderle, porque había leído en profundidad los órdenes del día que debíamos considerar. Sólo puedo decir que debemos hacer el esfuerzo porque somos legisladores del país, de este país federal.

No se puede centralizar la adopción con rapidez, cuando se trata de un problema de tipo local y el control social que ejercen las provincias es mucho más efectivo a los efectos de la creación de un registro único.

Tal vez he dicho apresuradamente, señor presidente, que de incluirse en la norma el artículo 5º, sancionaríamos una ley para los ricos y no una ley para adoptantes, algunos de ellos de condición humilde.

Algunas entidades nos dijeron que, si el registro estuviera en la Capital Federal, ello obligaría a los adoptantes y adoptados de distintos puntos del país a viajar. Pero como realmente no creo que el registro único lo pongan en San Luis, es que hago el esfuerzo de remarcar que este

tema nunca fue discutido, ni siquiera cuando el proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados.

Realmente, me siento muy sorprendido por esta cuestión ya que el proyecto tiene cosas muy interesantes. Y, sinceramente, creo que ninguno de los senadores con responsabilidad federal y provincial puede votar el artículo 5º tal como está redactado. Lo más práctico sería que ese artículo no existiera ya que hemos valorado aquellos principios fundamentales de sustanciación y no esto que, en realidad, es algo secundario.

Si vamos a dictar una ley para que proteja los posibles delitos que se pueden cometer en el control, no me explico para qué está el Código Penal.

En política, muchas veces exigen la residencia al funcionario público; sin embargo, vamos a adoptar un chico y lo inscribiremos en otro lado. Creo que eso tendría que analizarse profundamente.

No obstante lo dicho, señor presidente, creo que este proyecto tiene cosas muy importantes y es necesario remarcarlas, más allá de estar en un todo de acuerdo con las palabras del señor miembro informante de la mayoría. Creemos necesario afirmar que coincidimos en los principios del proyecto porque, como seguramente volverá a la Cámara de Diputados, es bueno que no sólo la bancada oficialista los apoye.

Creo que el principio de la prohibición de la guarda por escritura pública hay que ponerlo de relieve porque es lo más interesante que tiene y porque, indudablemente, hace a la transparencia de las adopciones.

El proceso único de la guarda al mismo juez de la adopción es algo que hace a la judicialización y jerarquización de la guarda. También el principio de la adopción plena y el de la simple, entendida como excepción, son principios importantes.

La atención y el interés del niño, la nulidad de la adopción por antecedentes de ilícitos y los claros rasgos de flexibilización, seguridad y agilidad que posee el proyecto realmente hacen que merezca nuestro apoyo. Lo mismo podemos decir del derecho a la identidad, que es un derecho a la memoria.

Sin embargo, habrá que ver qué sucede con el tema de la edad prevista en el artículo 19, máxime cuando está contemplada en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y, además, ratificada por la Constitución Nacional.

Hay otra serie de beneficios que posee el proyecto que, en realidad, no surgen de un artículo en particular y sí en forma indirecta; como el

principio de la permanencia del niño con su familia biológica y que la institucionalización sea tomada como una medida exclusivamente excepcional.

Creo que los legisladores tenemos que animarnos a trabajar para, consensuadamente y en conciencia, hacer un Código de Familia de modo que la ley de patronato no esté en contraposición con lo que estamos analizando sobre la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Si queremos dar jerarquía a las provincias, no tenemos que luchar para quitarles el registro sino para poner tribunales de familia en cada una de ellas. Y, finalmente, si sancionamos la ley de integración del derecho del niño, estaremos haciendo un gran aporte a la sociedad y no le temeremos al tráfico de niños.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por la Capital.

Sra. Fernández Meijide. — Señor presidente: estaba reflexionando y compartía con el senador Villarroel que la humanidad tuvo que esperar 18 siglos para que alguien se empezara a ocupar, desde la filosofía, de eso que era el niño: no de ese ser al que se esperaba hasta que fuera adulto y que, además, era propiedad de los adultos.

Fue Jean Jacques Rousseau quien empezó a escribir en *El Emilio* todo un plan de educación de Emilio. Paradojalmente, los hijos que Rousseau había tenido con una lavandera estaban todos en un orfanato. Rousseau escribía cómo debía criarse al niño, estimularlo, hacerlo crecer como ser independiente; pero él era el hijo al cual se refería y, además, era maestro de esas familias.

Desde ese entonces hasta hoy, ¿qué estuvo pasando en el trato de los adultos con respecto a los niños, en el marco de una relación tal como si en cada uno de nosotros, adultos, todavía no estuviera dentro el niño que creció para devenir hombre o mujer?

Los adultos, en muchos casos, tenemos la dificultad permanente de pensar en eso e imaginar cuáles eran nuestras necesidades y no condonarnos infantilmente o hacer las cosas de Don Fulgencio, sino hacernos cargo de todo el proceso de ese niño que creció.

También recordaba que, por ejemplo, un gran éxito de principios de siglo —creo que fue allá por 1912, cuando aquí comenzó a darse el sufragio universal— fue que en Inglaterra se determinó que los niños menores de 12 años iban a trabajar menos horas en las minas de carbón. Obviamente, eran los chicos del proletariado.

En la Argentina, por suerte, teníamos educación pública y obligatoria. En eso tuvimos una enorme ventaja en cuanto a nuestra población. A diferencia de otras poblaciones en Latinoamérica, la nuestra se hizo con niños que estudiaban y comían.

Sin embargo, la relación de colonización por parte de los adultos con los chicos hace que todavía hoy —y lo digo con todo respeto porque, desgraciadamente, lo he visto en el marco de terribles situaciones de nuestra propia historia política— mucha gente se sobresalte con esto de decir la verdad a los chicos adoptados.

Es como si el adulto se resistiera a ser el portador de esa verdad cuando está probado que el niño siempre sabe que es adoptado, así no lo sepa a nivel consciente. Hay un agujero en su psiquis que le está diciendo que hay una verdad que no le dicen; y muchas veces eso trae como consecuencia el hecho de que no pueda aprender otras cosas porque, a nivel consciente, no puede saber quiénes son ni de dónde vienen.

No estoy hablando porque me parece que es así. Uno de los psicoanalistas más importantes, el doctor Winnicot, ha realizado estudios en el tratamiento de niños. El creó la figura del apego maternal; de ese primer contacto con la madre que marca para siempre a un ser humano y algunos dicen que hace personas sanas o enfermas para el futuro, aunque cueste creerlo.

Uno de los experimentos realizados por el doctor Winnicot fue realizado en una sala en la que había niños. Cuando lloraba uno de ellos, pasaban por altoparlante el sonido del latido del corazón de su madre, e inmediatamente el niño recién nacido se callaba. El recuerdo del latido del corazón de su madre funcionaba como calmante.

El doctor Winnicot hizo muchas pruebas con bebés chimpancés relacionadas con el tema del contacto.

¿Por qué traigo esto a colación? Porque esta conciencia del niño que fue separado, incluso está muy poéticamente marcada en la "torah" cuando habla del ángel que besa y borra el conocimiento. La "torah" sostiene que en el momento de nacer sabemos todo lo que un día terminaríamos sabiendo al llegar a adultos, pero que un ángel nos besa en la frente y olvidamos todo. Por eso es que tenemos que aprender. Lo que parece no borrarse es la convicción de que hay una pertenencia.

De hecho, el derecho a la identidad es como un derecho muy elaborado; parece muy abstracto. A los esclavos le quitaban esa identidad;

no los mataban sino que los cambiaban de lugar y no los ponían con otros que fueran de la misma población para que no pudieran unirse en un mismo lenguaje y sentimiento.

Cuando a un niño no se le dice la verdad de su origen —obviamente, si se la conoce— se le está quitando su identidad. Incluso podría decirse que no se sabe cuál es su identidad, pero sí que no es el hijo de uno. Eso es mucho más conveniente; y cuanto más temprano, mejor. No hay que tener miedo a que sea el padre o la madre adoptante quienes le digan la verdad a ese niño porque son ellos los que pueden decirlo con más cariño, si es que la adopción fue hecha con el gesto de la generosidad y no del narcisismo ni del egoísmo.

Estados Unidos tuvo que cambiar sus leyes respecto de la adopción. Las agencias de adopción de ese país tenían prohibido hasta hace pocos años que dijeran al adoptado su origen. Pero fue tal la demanda de muchos adultos que habían sido adoptados de conocer su origen que fue necesario que se cambiaran las leyes. Actualmente las agencias de adopción les dicen a los adoptados su origen.

Me olvidé de señalar que voy a votar en general por la afirmativa; tuve mucho que ver con este proyecto en la Cámara de Diputados. Hay algunos puntos que vamos a discutir cuando los analicemos en particular. De todas maneras considero que sí hay un avance con este proyecto. En este tema tengo una diferencia con el doctor Agúndez, que seguramente no es grave. Yo creo que las leyes tienen que modificarse. Se cambió la mirada en este país con respecto a los niños. Fíjense que en el 71 se logró la primera ley de adopción —simple y plena—. Pero en la dictadura se robaban los chicos y los regalaban. Miren el desprecio que había por la identidad de esos niños; les quitaban su identidad por un afán de venganza y persecución. Esto ocurría en una dictadura. Y tiene que ser en una democracia, a pesar de que nos haya llevado muchos años, que nos animemos a pensar en profundidad en una ley distinta. Tiene que ser diferente: Ojalá que esto sea un signo de avance de esta sociedad, aunque creo que hemos tenido muchos retrocesos —en eso coincido con el doctor Agúndez—. Este proyecto de ley mira desde el derecho y la necesidad del niño y no desde el derecho y la necesidad del adulto, la que tampoco es desdeñable.

Bien decía hoy el senador Menem que hay tres actores: el niño, el adoptante y la familia biológica. También difiero un poco con él en

este aspecto. Hay adoptantes que no sólo adoptan por un problema de esterilidad; es decir, por una necesidad, sino porque tienen amor vacante. Adoptan aun cuando no sean estériles.

El Estado con sus instituciones es el que tiene que regular una buena relación entre esos tres actores; es el cuarto actor importante que con obligación y sabiduría puede hacer que dicha relación sea armoniosa.

Los primeros niños que pudieron ser identificados que habían sido secuestrados durante la dictadura eran dos hermanitos de origen uruguayo. Eran hijos de un matrimonio uruguayo-argentino Julián, refugiados aquí en la Argentina y secuestrados por las fuerzas armadas argentinas y uruguayas en colaboración. Los encontraron en Chile por obra de la solidaridad latinoamericana. Cuando accedieron a ellos, la abuela Julián viajó a Chile y se encontró con su nieto y su nieta, que estaban siendo educados por un dentista y una maestra chilenos con todo su amor.

La familia Julián no podía hacerse cargo, eran muy mayores y estaban destrozados anímicamente, pero así y todo, esa abuela había "patado" por Buenos Aires y por la Argentina para encontrar a sus nietos.

La familia chilena ofreció mudarse al Uruguay para no cortar el vínculo, y establecieron que los chicos iban a tener más familia. Con esto estoy defendiendo el valor de la familia biológica, además del de la familia adoptante.

No es problema; a veces la familia biológica por debilidades económicas, de caracterología o de constitución —esas debilidades que existen en nuestra sociedad— no puede hacerse cargo del chico. Pero no por eso si existe y si hay relación hay que cortar el lazo. El chico en todo caso tendrá más familia, como tienen muchos niños de divorciados vueltos a casar: tienen más abuelas, más tíos, más primos y hermanos.

No es sencillo —nada lo es—, pero mucho más complicados son los orfelinatos. Por lo tanto considero que con esta ley avanzamos. Pienso que cuando la discutamos en detalle a lo mejor podemos ajustarla; espero que sí. Me parece que el artículo 5º se puede precisar; y voy a solicitar que se establezca que no se acepte la entrega del niño hasta que no se hayan cumplido al menos cuarenta y cinco días después de nacido.

Hay veces en que las madres entregan y después se arrepienten. Una mujer en puerperio puede sentirse desbordada por la situación, entregar y después sentir la angustia de haber

hecho algo irreparable. No tornemos nada irreparable en esta relación; por eso debemos tener el mayor cuidado en este punto.

Como anuncié —no es novedad— voy a votar afirmativamente en general y luego voy a sollicitar que corriamos algunas cosas.

Sr. Presidente. — Antes de seguir adelante creo importante precisar que el artículo 5º no está creando un solo lugar del Registro Unico.

Seguramente cuando se debata en particular podrán precisar dónde se ubicarán los registros del Registro Unico. Que sea un Registro Unico no implica necesariamente un solo lugar físico desde el punto de vista jurídico.

Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: estamos sin duda alguna con un tema apasionante, porque aprisiona nuestros sentimientos.

Confieso que he empezado a estudiarlo hace pocos días, creyendo incursionar en un problema jurídico. Pero a poco que fui recibiendo testimonios —algunos de ellos lacerantes—, me encontré con que había algo mucho más profundo y hondo que las normas: era el problema de los sentimientos.

Y esto me ha creado una suerte de compromiso afectivo y espiritual, una suerte de compromiso irrenunciable que hizo que tome con pasión este tema. Seguramente la misma pasión van a tener o han tenido quienes han expuesto o vayan a exponer y quienes coincidan o discrepen con nosotros en las soluciones que finalmente esta Cámara pueda adoptar.

De nuestro acierto o de nuestro error vamos a ser testigos seguramente en el curso de la aplicación de las normas. Vamos a ser felices si acertamos e infelices si erramos.

Confío en que vamos a poner la mejor voluntad, la mejor buena fe para tratar de encontrar aquello que nuestra conciencia nos imponga.

Como lo señalaba el señor senador Branda al iniciar su exposición, éste es sin duda alguna un tema altamente sensible, que no es de hoy, sino que viene de mucho tiempo atrás. Claro está que en otros tiempos —como lo señalaba el señor senador Menem—, el significado de la adopción tanto jurídicamente como en los hechos estaba centrado en otro tipo de intereses: el robustecimiento de la familia tomada como ejemplo de índole política, como ocurría en Roma, o la adopción en tiempos mucho más remotos, tal el caso de la India o el de las épocas

del Código de Hammurabi, que se citó anteriormente. Todo esto demuestra que desde tiempos inmemoriales existía en los hechos el instituto de la adopción.

Es evidente que hoy en nuestra sociedad contemporánea la adopción tiene otro símbolo, otra fundamentación, otra esencia; y eso ya no está basado en motivos de índole política como pudo haber sido en otros tiempos, sino en un sentimiento intrínseco de justicia que tiende a buscar una solución a un problema afligente que ha sido destacado por los senadores que me han precedido en el uso de la palabra, buscando la etiología del abandono, la etiología de la situación de desamparo en que se encuentran millones de criaturas en el mundo.

Coincido con el señor senador Menem cuando hacía referencia —y lo ha recordado recién la señora senadora Fernández Meijide— a la existencia de diversos aspectos que entroncan con esta cuestión. Me refiero al problema de la niñez abandonada o desamparada, al problema de los que no tienen descendencia y al problema social que se origina como consecuencia de la situación de los unos y los otros.

A nuestro juicio, la estrella polar que debe guiarnos para arbitrar las soluciones de estos tres problemas iniciales es el interés del niño, respecto del cual nuestro país está comprometido legalmente como miembro de la Convención de los Derechos del Niño. Pero con Convención o sin ella, por sobre todas las cosas están comprometidos los sentimientos que deben guiarnos en esta materia.

En la época de la sanción de nuestro Código Civil, la adopción no era aceptada por el eminente codificador, que tenía ideas que hoy en día han sido superadas. Dicho instituto tuvo su expresión legal en leyes que han sido recordadas: la de 1948 y la de 1971, que rige actualmente, juntamente con otras normas del Código Civil.

El acierto con que nosotros actuemos nos justificará si podemos entrar en detallismos o no; pero lo fundamental es que nos pongamos de acuerdo en ciertos principios básicos. Estamos legislando sobre la paternidad que evidentemente es un símbolo entrañable, un vínculo muy especial.

Si bien es cierto que la paternidad tiene su origen en el nexo biológico de dos personas, no se agota en él, pues supone una larga y complicada misión a través de la vida, cuyo cumplimiento debe exigirse a los padres.

Pero el adoptante no tiene, como ocurre con el padre biológico, ese nexo con el adoptado, no obstante lo cual asume un rol al cual no está obligado y en virtud del cual será capaz de anudar una relación de compromiso y de afecto con quien biológicamente no es su hijo pero por quien está dispuesto a actuar como si lo fuera. Ello supone en el adoptante una capacidad de afecto que no todos tenemos.

Este proyecto viene a introducir cambios importantes, como se ha puesto de manifiesto en el curso del debate. Brevemente, señalo que el artículo 6º reduce la edad mínima de los eventuales adoptantes, propiciando que pase de 35 años —como fija la ley vigente— a 30.

También hay otro acierto: se eleva a cinco años el tiempo de residencia mínima de los aspirantes a la adopción. A su vez, es importante destacar la cuestión de la citación de los padres biológicos, con los alcances que señaló el señor senador Menem e, inclusive, con la anunciada reforma que será materia de discusión en el tratamiento en particular de este proyecto.

A mi juicio, también es elogiable la proscripción que se hace de la antigua costumbre de la escritura pública, que se prohíbe expresamente en el artículo 9º. Asimismo, son elogiables las distintas precauciones que norma el artículo 7º respecto de la guarda del menor.

Pero lo importante —en esto coincido con lo que surge expresamente del proyecto de ley y que ha sido enfatizado por algunos oradores preopinantes— es que se le entrega al juez el poder de discrecionalidad y la capacidad necesaria para laudar frente a este tremendo problema en el que muchas veces, con la decisión que finalmente se adopte, puede hallarse el interés encontrado de aquellos que quieren adoptar, pero que no tienen la capacidad emocional o afectiva suficiente, lo que provoca un estado de contraposición con los legítimos intereses del niño.

Está bien pues que este instituto que vamos a sancionar deje de lado esa corruptela de la escritura pública y les entregue a los jueces la discrecionalidad necesaria —que no debe ser arbitrariedad— para poder laudar. A tal efecto, los magistrados deben estar munidos de la documentación y del conocimiento necesarios para decidir en cada caso quién es el mejor padre a fin de satisfacer los intereses del niño.

En resumidas cuentas, considero que este texto mejora la normativa en la materia. Sin perjuicio de ello, considero que debemos discutir todo lo que sea necesario, básicamente el

artículo 5º que, sin duda alguna, es el que ha suscitado nuestro interés, que posiblemente no sea coincidente con la postura de otros señores senadores.

Ha habido algunas disidencias y sé que existen otras. Las que he podido conocer son las que están registradas en el orden del día impreso 1.389, presentadas por la señora senadora Fernández Meijide y por el señor senador San Millán. Al respecto, coincido con la disidencia parcial de la señora senadora por la Capital, quien destaca que el interés primordial que debe primar es el del niño. También postula que se asegure el consentimiento de los padres biológicos, a efectos de que sea libre y consciente, para evitar decisiones en donde la voluntad, a veces —como lo dijo la señora senadora recientemente en su exposición—, puede estar viciada por el estado puerperal o por situaciones económicas afligentes, que cambian cuando luego viene la reflexión o la requisitoria sentimental posterior.

Coincido también con lo manifestado por el señor senador San Millán, porque evidentemente la familia debe ser el punto fundamental que debe tenerse en cuenta a efectos de asegurar el éxito de la adopción.

Señalo esto porque conocemos casos que, a veces, son como los matrimonios, en donde se empieza con los mejores auspicios, sentimientos y esperanzas, pero luego no funcionan. Y ocurre que si no existe un bien estudiado proceso previo de la adopción, no se encontrará el mejor padre que el hijo necesita.

Entonces es evidente que el estudio de la familia es uno de los elementos más importantes que pueden viabilizar el porvenir más venturoso del niño.

Señor presidente: coincido en que puede ser buena la incorporación de esta futura ley al cuerpo del Código Civil, pero siempre y cuando estemos absolutamente seguros de que encontraremos las mejores y más acertadas soluciones a este espinoso tema que sancionaremos mañana.

Si así fuera, seguramente que ello será útil. Pero de no ser así, es decir, de no tener un consenso cierto entre nosotros, la Cámara de Diputados tendrá que intervenir como consecuencia de las reformas parciales que ya han sido señaladas por parte de algunos de los oradores que me precedieron en el uso de la palabra; entonces, quizá sea mejor que la sanción de este proyecto quede con el rango de ley, que será seguramente más fácil de rectificar en caso de que

los acontecimientos futuros persuadan de ello a los legisladores del mañana.

Creo que el punto que mañana concitará mayor debate será el vinculado con el artículo 5°. No es que sea un augur, pero conozco mi opinión y también la de otros senadores. Entonces, convoco y aspiro a que mañana hagamos una discusión levantada, pública o privada, sin ninguna jactancia intelectual o preconceitos, es decir, escuchando lo que nos digan aquellos que no opinan como nosotros y buscando que en el futuro nuestra conciencia no nos reproche que por un defecto humano somos involuntarios ejecutores de la desdicha de los niños.

Por estas razones adelanto mi voto favorable al proyecto en general y destaco que con relación al artículo 5° voy a presentar mis propias conclusiones.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Avelín. — Señor presidente: éste es un proyecto de ley vinculado con una institución social, humana, de alta jerarquía, de mucha responsabilidad y muy solidaria.

Creo que estamos frente a un tema trascendente, que posee una fuerza humana muy grande y que, por lo tanto, debemos equivocarnos lo menos posible, a fin de que el niño, que es el objetivo más importante, pueda tener un hogar, una familia y las raíces necesarias para su propia protección. El niño es lo fundamental.

Indudablemente que cada familia es un mundo que hay que analizar y estudiar en profundidad. La adopción tiene a veces más significado porque implica criar un hijo, protegerlo, darle alas y también inculcarle todas las virtudes que una familia puede brindar al niño marginado, pobre, olvidado, el que a veces está en la calle sin provenir, sin padres y sin posibilidades. ¿Qué puede ocurrir cuando un niño es entregado inmediatamente luego de nacido? ¿Qué ocurre cuando su madre es pobre, está sobrecargada de hijos, separada de su marido y a lo mejor, en un acto de rebeldía y de propia violencia posparto, puede entregar un niño y luego de días o meses empieza a rebobinar mentalmente y a sentir el afecto y el sentimiento propio de una madre? Por eso creo que vale no equivocarnos en las fechas de entrega ni tampoco en el análisis que debemos hacer permanentemente respecto de este tema.

Siempre se ven casos de esa rebeldía que provoca la pobreza y la marginación, de esas madres que luego van en busca del hijo que entregan con la mejor buena fe.

Además, es importante la intervención judicial que cubre todos los ciclos correspondientes de la entrega del niño a los padres adoptivos.

También debemos diferenciar lo que significa la adopción de lo que hoy se pretende hacer con la fertilización asistida. Son cosas totalmente diferentes, porque lo primero implica un acto de solidaridad, de respeto a la vida, así como también de entrega total para criar un hijo y para inculcarle todo lo que significa la protección futura. Lo otro significa una manipulación que, indudablemente, puede llevarnos a terrenos de aventura y de perversiones futuras. Porque no debemos olvidar el trastocamiento de cromosomas y de genes cuando queremos realmente trabajar en la fertilización asistida; es un tema que puede agravar a la especie humana. Puede agravarla por las aventuras existentes, por el negocio que representa, por los intereses económicos y por todo lo que realmente es diferente a lo que significa la adopción.

La adopción es una expresión humana, solidaria, social, de alto sentido de responsabilidad. Pero pienso que todo esto tenemos que manejarlo con mucha prudencia y sabiduría y también con el sentido de darle al niño lo mejor.

También quiero manifestar que hay muchas clases sociales y muchos padres adoptivos que son pobres y quieren adoptar a un niño. Ustedes saben perfectamente bien que al niño hay que analizarlo desde el punto de vista psíquico y somático. Y hay mucha gente que adopta a un niño y no tiene medios económicos para hacerle revisar y controlarlo desde este punto de vista.

Desde los dieciocho meses hasta los dos años el Estado debe darle una pequeña cuota, sobre todo a la gente necesitada, a la que no tiene recursos económicos y realmente quiere adoptar para permitirle el control psíquico y somático. No sé si será posible crear un artículo en este proyecto de ley para que de esa manera nosotros aseguremos todo lo que significa la integridad psíquica y somática del niño que está siendo adoptado.

De todas maneras doy mi voto favorable a este proyecto de ley e insisto en que lo más importante es el niño, su control psíquico y somático así, como también su vigilancia permanente. También es importante la intervención judicial que cubre todas las etapas del niño que va a ser adoptado por una familia. Por supuesto darle una familia, un hogar y un futuro es un acto de estricta humanidad y de mucha solidaridad. Por eso voy a apoyar este proyecto, que mañana podrá ser perfectible, en la medida en que trans-

curra el tiempo y aparezcan otras situaciones económicas y sociales.

En definitiva, creo que el sentido humano de esta iniciativa puede conformarnos espiritualmente a todos los señores senadores.

Sr. Presidente. — Restan dos oradores que sabemos no van a extenderse mucho. La Presidencia llamará para votar. Una vez que termine el último señor senador que debe hacer uso de la palabra y si no hubiere número, se pasará a cuarto intermedio, según lo pactado oportunamente en esta sesión.

— Se llama para votar.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por Tucumán.

Sra. Rivas. — Señor presidente: haré una exposición muy breve, dado que, como consecuencia de lo avanzado de la hora, voy a pedir que se inserte en el Diario de Sesiones el discurso que tenía preparado.

— El texto de la inserción solicitada es el siguiente:

Señor presidente:

La sanción de un nuevo régimen jurídico de Adopción ha sido una aspiración que he mantenido a lo largo de los trece años que llevo desempeñando el cargo de senadora nacional. En esta Cámara he presentado proyectos de reforma de la ley 19.134 desde 1986, y los he ido reiterando hasta que, finalmente, los mismos han sido considerados para su compatibilización con el proyecto que con media sanción remitiera la Cámara de Diputados.

La preocupación por normatizar el instituto de la adopción en forma más adecuada a los derechos e intereses de los menores y adoptantes, surgió no solo como producto de una inquietud personal. También hemos procurado receptar las inquietudes y opiniones de quienes, habiendo sido destinatarios de la norma como adoptantes o adoptados, nos hicieron llegar sus opiniones sobre determinados preceptos legales que consideraban debían ser modificados en pro de facilitar la aplicación y aumentar el número de adopciones. Y un invaluable aporte, respecto del cual reiteramos nuestro agradecimiento, ha sido el de funcionarios del área y letrados que contribuyeron con su esclarecida opinión.

Tanto el proyecto que ha sido remitido a esta Cámara con media sanción de Diputados, cuanto los originarios del Senado entre los cuales se encuentran aquellos de los que soy autora, se han inspirado en algunos principios rectores.

Ellos han sido, en primer lugar, el mayor y mejor resguardo del bien jurídico protegido primordialmente, que es el amparo de los derechos del niño. Se ha tratado de focalizar la norma jurídica de forma tal que sea suficiente garantía, en su ejecución, de la consecución de tal objetivo.

Además, se ha tratado de reducir plazos que aparecían como innecesariamente dilatados para la concreción de

las aspiraciones y necesidades de adoptantes y adoptados, como por ejemplo el lapso de guarda. Y, a fin de posibilitar la más temprana materialización de familias por adopción, se ha rebajado la edad requerida para ser adoptante. Incluso se establece que el mínimo de edad requerida para adoptar (30 años) no regirá para las parejas que acrediten la imposibilidad de procrear.

Una innovación destacable del texto legal propuesto a esta Honorable Cámara, es la creación del Registro Único de Aspirantes a la Adopción. De esta manera se dejan sin efecto los numerosos registros jurisdiccionales que existen en la actualidad, y al centralizarse la información se aspira a una forma más justa y adecuada de atribución de los lapsos de espera.

Otra innovación destacable es la prohibición de la entrega de la guarda de los menores mediante escritura pública o acto administrativo. Sólo el juez podrá, de aquí en más, otorgar la guarda con propósito de adopción. Este requisito resulta indispensable para asegurar la observancia de los recaudos legales que garanticen los derechos respectivos de adoptantes y adoptados, e imposibiliten la realización de maniobras al margen de las prescripciones jurídicas.

Se incorpora una nueva causal de nulidad absoluta de la adopción. La misma regirá para los casos en que el aparente abandono del menor proviniera de un hecho ilícito o delito, del cual hubieren sido víctimas el menor adoptado y/o sus progenitores. Con esta previsión legal se trata de evitar el tráfico de menores, demostrando coherencia con las modificaciones del Código Penal al respecto que han surgido de este Honorable Senado. Igualmente, la norma contempla situaciones de desaparición forzada de los padres biológicos.

Se ha efectuado la adecuación de las normas jurídicas de adopción, coordinándolas con la normativa vigente en materia de matrimonio y divorcio a partir de la sanción de la ley 23.515.

Creemos que el texto legal elaborado cumple en posibilitar una instancia superadora al instituto de adopción, promoviendo una reforma integral al sistema normativo vigente al respecto.

Y, al mismo tiempo, se facilita la finalidad primordial de la adopción que es brindar una familia a los niños que carecen de ella, en la conciencia de que la misma es indispensable para el pleno desarrollo de todas las potencialidades del menor.

El Derecho debe asegurar esta protección del niño. Debe establecer y promocionar el instituto de la adopción, como forma de garantizar que los niños necesitados de una familia puedan acceder a las familias adoptivas, tanto por carecer de una de origen, como por un insuficiente o inhábil desempeño de la patria potestad. Pero no debe entenderse que esta institución sea sancionatoria de determinadas conductas paternas. Por el contrario, su función principal es la tutela de los derechos de los menores.

Creemos que este nuevo texto legal de adopción implica un avance hacia la mayor y mejor protección de los derechos de los menores. Conscientes de esta responsabilidad solicitamos a esta Honorable Cámara la aprobación del presente texto legal.

Creo que sobre el proyecto de ley de adopción ya se ha dicho todo.

No puedo ocultar la satisfacción que me causa el hecho de que tratemos esta iniciativa, que presentara por primera vez en 1986 en el Senado de la Nación y caducara por distintas causas. Felizmente hemos podido compatibilizar el proyecto que viene de la Cámara de Diputados con los que se encuentran en el Senado, para considerar hoy el que se halla en nuestras bancas.

Debo agradecer en forma especial los aportes que me hicieron llegar tanto particulares como instituciones, funcionarios del área y profesionales. También, muy especialmente el trabajo de las distintas comisiones.

Creo que el texto legal que estamos tratando cumple con una instancia superadora, promoviendo una reforma a la ley 19.134, haciéndola mucho más flexible.

Quienes me precedieron en el uso de la palabra —tanto el miembro informante como los demás señores senadores— ya han hablado con gran precisión y solvencia sobre los distintos artículos.

El único punto que, de alguna manera, presenta disidencias sobre las cuales nos pondremos de acuerdo mañana es el artículo 5°. Interpreto que el registro único del que se habla tiene la única finalidad de respetar el orden de los inscritos y que haya una mayor transparencia en el otorgamiento de la guarda.

No quiero extenderme en otros aspectos. Como dije, mañana seguiremos viendo otros artículos en particular.

Por otra parte, solicito que inmediatamente después de aprobarse en particular este proyecto sea remitido a la Cámara de Diputados para que mañana mismo pueda ser aprobado.

Sr. Presidente. — La inserción que solicita la señora senadora será votada con el resto de las inserciones, luego de votarse en general el proyecto.

Tiene la palabra el señor senador por Salta del Partido Renovador.

Sr. Ulloa. — Señor presidente: tanto en las explicaciones de los señores miembros informantes como en las exposiciones de los colegas señores senadores se ha insistido en el punto que más me preocupaba personalmente. El principal bien tutelar por esta ley es el interés del niño. Es decir, se trata de buscar los mejores padres adoptivos para cada niño y no de buscar un niño para alguna pareja o alguna persona que quiera adoptar un chico.

Esto ha sido perfectamente aclarado y coincide con el artículo de la Convención Interna-

cional sobre los Derechos del Niño que leyera el señor miembro informante, que establece el interés superior del niño como principio general del Derecho.

El interés superior del niño en la adopción es brindarle un padre y una madre adoptivos, en la medida de lo posible. Quiero hacer alguna reflexión con relación a esto. La ley permite —y no me opongo a ello— que personas solteras adopten chicos. Me animaría a decir que, en ciertos casos, especialmente en el de las mujeres, puede ser perfectamente conveniente. Pero la formación del niño exige la presencia, la figura del padre y de la madre. Es un efecto no deseado que algunos chicos, en la realidad de su vida, pierdan a uno de sus progenitores. Pero realmente no me parece conveniente que decidamos la entrega sin uno de los progenitores.

En este sentido, a veces puede ser el camino más adecuado, pero insisto en que habitualmente esto se da con la mujer que adopta. Por eso me preocupaba el artículo 5° del proyecto original, que establecía que se debía respetar indefectiblemente el orden. En esto quizá coincido con la señora senadora Rivas.

A este artículo, el 5°, se refiere el punto tercero de los fundamentos, y lo destaco para señalar que, desde mi punto de vista, no es ésta la interpretación que se debe dar.

El punto 3° de los fundamentos dice que se establece que se debe respetar indefectiblemente el orden de inscripción. ¿Qué significa esto? Que hay un stock de padres adoptivos y que se les quiere buscar un chico. Este no es el sentido. Lo han aclarado perfectamente los señores miembros informantes. Pero como queda en los fundamentos, y a veces ellos son fuente para la exégesis de la ley, prefiero señalarlo taxativamente.

Además, quisiera establecer dos aspectos con respecto a este proyecto. En primer lugar, el proceso de adopción es complejo. Se necesitan equipos, conocimientos, análisis y tiempo. En ese sentido, es conveniente que de alguna forma esta ley contemple la inclusión de los equipos de adopción, que los quiero distinguir perfectamente de las agencias de adopción al estilo de Estados Unidos, por ejemplo, en donde es una actividad económica más.

En la Argentina hay equipos de adopción, como el San José, el de Familia Cristiana, etcétera, que son entidades sin fines de lucro, con médicos, psicólogos, sociólogos, psicopedagogos, que son auxiliares del juez y que además hacen una tarea de formación de los adoptantes.

Esto les permite seguir de cerca el proceso de adopción luego de que el juez se ha pronunciado, para asistir a los padres.

Este es un punto que quería señalar: la conveniencia de dar algún marco jurídico a estos equipos de adopción.

El segundo punto es que coincido con la disidencia del señor senador San Millán cuando él señala la necesidad o la conveniencia de dar prioridad a los matrimonios legítimamente constituidos o a aquellos con uniones de hecho que tengan estabilidad a lo largo de un tiempo prudencial, que se señala como de cinco años. Dice esta disidencia: "Tendrán preferencia para el otorgamiento de la adopción los matrimonios legalmente constituidos y, en su defecto, las uniones de hecho que acrediten una convivencia continuada no menor a los cinco (5) años a la fecha de solicitud de la adopción".

En este sentido, y volviendo al tema de la adopción sin la presencia de uno de los progenitores, he visto personalmente —y por eso lo menciono— el caso de tres hermanos dados en adopción a una persona sola de 48 años; la mayor, una niña de nueve años y dos menores que ella. Cuando la chica cumplió 16 años, el padre adoptivo la violó. Es decir, la presencia de la mujer como equilibrio es una garantía. No siempre será posible pero es un reaseguro más.

Hay otro aspecto que debo señalar con mucha prudencia y que siento el deber de hacerlo con mucha sinceridad. Me refiero al caso de ciertas deformaciones o problemas de personalidad de algunas personas, concretamente a los homosexuales. No voy a emitir ningún juicio de valor sobre los problemas de las personas homosexuales y no voy a expresar ninguna tacha ética. Al contrario, pero señalo que el Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, dice expresamente que queda prohibida la discriminación por orientación sexual. Es decir, un juez no podría, desde el punto de vista moral, discriminar u oponerse a que una persona homosexual adopte un chico. Hay sí un criterio de idoneidad en el juicio, lo que permite decidir, pero no se puede invocar ese criterio, por lo menos en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.

Sinceramente creo que no es conveniente —por eso quiero señalarlo— la posibilidad de que se dé esa circunstancia.

Señor presidente: creo que el proyecto de ley es bueno y que ha sido exhaustivamente analizado, por lo cual adelanto mi voto favorable con algunas observaciones en particular.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos, que cierra la lista de oradores.

Sr. Alasino. — Antes de comenzar quisiera saber si hay posibilidades de que logremos número para votar.

Sr. Presidente. — Hay 39 señores senadores en la casa. Estoy llamando desde hace diecisiete minutos y seguiré haciéndolo hasta que usted termine de hablar.

Sr. Alasino. — Voy a hacer una muy breve intervención.

Ante todo, quiero decir que la adopción ha ido evolucionando poco a poco en favor de las personas. Durante mucho tiempo la adopción fue un sistema que solamente pretendía atender la carencia de hijos de matrimonios. Con la evolución de la captación del valor persona humana de la sociedad fue cambiando la aprehensión de ese valor para centrarse mucho más en la persona de que se trata que, tal vez, en el hijo que se agrega al matrimonio que no lo puede tener.

A quienes trabajamos mucho tiempo en la profesión, que estudiamos con una ley de adopción y empezamos a hacer nuestras primeras armas judiciales con la ley vigente actualmente, nos tocó advertir cómo poco a poco se empezaba a internalizar en la sociedad argentina qué era lo más importante para proteger.

Comparto algunas cosas que decía la señora senadora por la Capital. La situación que tocó vivir a los argentinos durante el proceso militar quizás sirva para advertir que la identidad es un bien jurídico a proteger, de tanta o mayor valía que otros atributos de la persona humana, que tal vez estaban reconocidos en el derecho romano. Creo que esta ley en ese sentido es buena.

Entiendo también que mantener el sistema de la vieja ley en los dos tipos de adopción es bueno. Se trata de una experiencia que la actual ley imprimió a la legislación y que antes no se conocía.

Asimismo, la experiencia que hemos tenido con la ley y la forma de entender este valor que resulta tan importante para los argentinos, terminan dando como resultado este proyecto de ley de adopción, que yo también considero sustancialmente mejor que la norma que hoy nos rige.

Creo, además, que la actividad de control del juez y del ministerio público ha dado buen resultado en el proceso de adopción y respecto de la capacidad del juez para discernir elementos sus-

tanciales o accidentales en las personas de los adoptantes y del menor.

Estimo que esta iniciativa —en beneficio del menor— pone en cabeza del juez muchos más elementos que le permitirán proteger aún más la persona del menor que se intenta o pretende incorporar a una familia, lo cual constituye otro de los objetivos de la norma.

Considero que es buena, también —y lo he meditado profundamente—, esta novedosa disposición que aparece en la iniciativa, de hacer constar en la sentencia la obligación por parte de los adoptantes de informar al adoptado, al hijo, de su situación biológica particular.

También comparto lo dicho por la señora senadora por la Capital, a quien escuché con mucha atención, en cuanto a que más allá de la opción entre dos aspectos que se quiere proteger, la sinceridad y la necesidad de otorgar a la situación una transparencia absoluta debe dar mucho más resultado que a la inversa.

Si bien ésta no era una obligación expresa de la ley, la madurez había dispuesto que la mayoría de los padres o de los adoptantes ejercieran esta práctica cotidianamente con los hijos adoptados.

Por otra parte, el hecho de repetir la experiencia de la ley actual, en que la adopción genera vínculos biológicos con la familia de los adoptantes, es bueno, y considero que la adopción semiplena —como dice la ley— o simple —como expresa esta iniciativa—, que tiene otro tipo de efectos, también ha dado resultados positivos importantes.

Asimismo, la disposición que establece la igualdad entre los hijos y los adoptados, que no estaba en la vieja ley, es algo que redundará en la consolidación de la familia que, con mucho amor, constituyen los padres adoptantes con los chicos que ingresan en su familia.

Creo que esa norma —también novedosa— del proyecto en consideración imprime algo que todo el mundo trató de referir aquí, esto es, el equilibrio que la iniciativa intenta establecer entre los distintos valores que están en juego, no solamente entre los actores.

En buena hora, señor presidente, que intentemos mejorar la Ley de Adopción y ojalá que los resultados que se obtengan sean los que todos los señores senadores que participamos de esta discusión han expresado, lo cual, de alguna

Sr. Presidente. — Con 38 señores senadores en la casa y habiendo llamado durante un tiempo prudencial, en virtud de las facultades que este cuerpo otorgó a la Presidencia...

Sr. Branda. — Señor presidente...

Sr. Presidente. — Señor senador por Formosa...

Sr. Branda. — Solicito que se continúe llamando durante cinco minutos y se pida a los señores presidentes de bloque un último esfuerzo a los efectos de que se pueda reunir quórum y votar en general el proyecto en consideración.

Sr. Presidente. — La Presidencia solicita la colaboración de los señores auxiliares de bloque a fin de que podamos lograr quórum.

Se llamará durante cinco minutos más.

Sra. Fernández Meijide. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por la Capital.

Sra. Fernández Meijide. — Señor presidente: sólo un minuto, a fin de compartir una observación que se hace en este momento.

Cuando ocurrió la votación en Diputados, fuimos todas mujeres las que defendimos el proyecto desde cada bloque. Ello parecía abonar la teoría de que, cuando se trata de hijos, tienen la voz cantante las mujeres. Hoy, por suerte, fueron hombres los que hablaron. Es cierto que no somos tantas, pero los hombres lo hicieron con la misma intensidad que las mujeres en la Cámara de Diputados. Me alegro.

—Se continúa llamando.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Avelín, aunque la Presidencia advierte que el debate en general está agotado.

Sr. Avelín. — Gracias, señor presidente. Seré respetuoso de lo que ha dicho.

Quería preguntar al señor senador Branda si es factible agregar en el articulado algún aporte económico a la gente que adopte un niño y que tenga necesidades de ese tipo para el período entre los 18 meses y los 3 años, tanto desde el punto de vista físico como psíquico. De esa manera, podría existir una orientación y, al mismo tiempo, un análisis real de la parte física y psíquica del niño.

Sr. Presidente. — Es una manifestación fuera del debate en general.

Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Branda. — Vamos a abusar de este diálogo breve bajo su dirección.

Entiendo que hay organismos específicos que tienen presupuesto para atender lo que el señor senador plantea. Además, establecer un tema de esa naturaleza en el proyecto no sería de buena técnica legislativa, máxime si, como lo ha dicho el señor senador por La Rioja doctor Eduardo Menem, eso se pretende incorporar dentro del Código Civil a fin de dar un ordenamiento total y producir así una consolidación de toda la temática de familia dentro de dicho Código.

Reitero que introducir ese tema en el proyecto no sería de buena técnica jurídica ni legislativa.

—Se continúa llamando.

Sr. Presidente. — Si los bloques colaboran, mañana podremos comenzar la sesión sin necesidad de quórum. Se votará en general y se pasará a cuarto intermedio.

Sr. Aguirre Lanari. — Propongo que el apoyo económico a que hizo referencia el señor senador Avelín se cristalice haciendo que el comedor done la mitad de lo que se ha consumido esta noche o se esté consumiendo. *(Risas.)*

—Luego de unos instantes:

Sr. Avelín. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Avelín. — Señor presidente: sugiero que se siga llamando por cinco minutos más y, de no formarse quórum, se levante la sesión.

Sr. Presidente. — Yo ya lo habría hecho si no fuera por el hecho de que los auxiliares del bloque justicialista me informaron que está por ingresar al recinto el señor senador Cabana, con lo cual tendríamos el número suficiente para habilitar la posibilidad de que mañana reanudemos la sesión a las 15 sin necesidad de quórum y proceder al tratamiento en particular.

Si no fuera por este motivo no insistiría en esperar a que se forme quórum.

Sr. Avelín. — Perfecto, señor presidente.

—Se continúa llamando.

—Ingresa el señor senador Cabana. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente. — La Presidencia agradece al señor senador por Jujuy que haya venido y que no sea en pijama. *(Risas.)*

Si se sientan todos los señores senadores, tendría que haber 37... Ahora sí.

Se va a votar en general el proyecto de ley de adopción.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda aprobado por unanimidad en general.

Sr. Alasino. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor presidente del bloque justicialista. Entiendo que el señor senador quiere hacer una moción respecto de la votación en particular.

Sr. Alasino. — Sí, señor presidente. Si hay acuerdo, propongo que hagamos el tratamiento en particular por capítulos, con la posibilidad de diferir la votación en particular para después de toda la discusión.

Sr. Presidente. — El señor senador por Entre Ríos formuló una moción para que hoy comencemos el debate por capítulo y que la votación también sea por capítulo, facultando a la Presidencia a diferir votaciones en caso de que no haya quórum.

Se va a votar la moción.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda aprobada la moción.

Sr. Presidente. — Pasamos a cuarto intermedio...

Sr. Figueroa. — Falta que se voten los pedidos de inserción.

Sr. Presidente. — Tiene razón el señor senador. Pido a los señores senadores que tomen asiento. Suerte que el señor senador por Santiago del Estero siempre está atento.

Se van a votar los pedidos de inserción formulados por los señores senadores.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Se procederá en consecuencia.¹

Pasamos a cuarto intermedio hasta hoy a las 15.

—Es la 0 y 23 del jueves 28 de noviembre.

MARIO A. BALLESTER.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

¹ Ver el Apéndice.

II

INSERCIÓN

Entregada por el señor senador Romero Feris

Señor presidente:

El proyecto que hoy analizamos tiende a perfeccionar el sistema establecido por la ley 19.134 con las reformas incorporadas por las leyes 23.264 y 23.515. Elimina o disminuye impedimentos y restricciones en lo que hace a la posibilidad de adoptar y de ser adoptado y agiliza los trámites que ubica, exclusivamente, en sede judicial.

Vengo pues, a expresar mi apoyo en general al meditado dictamen de la Comisión de Legislación General y Familia y Minoridad al que propongo sólo cambios puntuales que más adelante referiré.

La adopción, como es sabido, no fue tratada por Vélez Sarsfield. Este tuvo la vivencia del desuso que se había operado tanto en España —donde fue regulada en forma sumaria por las partidas— como en Francia, donde había sido contemplada por el Código Napoleón que estableció, desde el punto de vista económico, un vínculo mucho más débil que la filiación de sangre. La visión antigua parecía dirigida a posibilitar la adopción de hijos que en realidad eran propios. Con el tiempo, la institución se abrió camino lentamente, pero con certeza en nuestra sociedad, persiguiendo una doble finalidad que

merece todo el apoyo de las instituciones: dar hijos a quien no los tiene por naturaleza y dar padres a quienes le faltan.

Esta falta puede deberse a causas naturales, como la muerte, a causas psicológicas de los progenitores que optan por el abandono o a causas socioeconómicas, siempre complejas, que llevan a los padres a desentenderse de la atención y educación de los hijos.

Pero el nuevo criterio de la adopción no sólo implica la protección a los menores abandonados o sin padres, sino la existencia de tres sujetos y esto está contemplado con precisión por la ley: el menor adoptado cuyo interés es prevalente, los padres biológicos y los padres adoptivos. Los tres intereses deben ser correlacionados y garantizados. También la celeridad en la culminación de los procesos y la posibilidad de que la paternidad por opción sea asumida por hombres y mujeres en la plenitud de su vitalidad. Las relaciones que hacen a la adopción se han modificado a medida que va evolucionando la conciencia sobre el valor supremo de la vida humana y se hacen más complejas las relaciones entre padres e hijos. Por tanto estimo conveniente esta actualización de una ley, que en

su momento significó un paso de importancia para la creación de nuevos vínculos, dado que el sistema anterior de 1948 (ley 13.252), no contemplaba la adopción plena, que hoy constituye el núcleo de la institución.

A esto tiende la disminución de la edad requerida en los adoptantes, que es una constante en las diversas leyes sancionadas en nuestro país y también en el derecho comparado y que el proyecto fija en treinta años, pudiendo disminuir dicha edad si se acredita la imposibilidad de tener descendencia (artículo 6º), o si los cónyuges tienen más de tres años de casados.

Considero acertado que el proyecto disponga que si se adoptase a varios menores todas las adopciones sean del mismo tipo.

Esto tiende a subrayar el principio de igualdad y no discriminación, que constituye uno de los pilares de nuestro sistema jurídico y que ha sido subrayada por los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a nuestra Constitución. La ley subraya así la esencial igualdad entre los hijos.

Constituye también un resguardo sustancial que se prevea que para ser adoptante es necesario acreditar de manera fehaciente e indubitable residencia permanente en el país por un período mínimo de cinco años.

Lamentablemente existen intereses oscuros que tratan de crear un comercio infame alrededor de la adopción. La crónica diaria ha señalado algunos casos, que si bien aislados, deben ser advertidos por la ley. Ellos castigan las regiones más pobres. Es así como nuestro país, al ratificar la Convención de los Derechos del Niño, hizo expresa reserva de que ello no implicaba la vigencia de las disposiciones de ese tratado referentes a la adopción internacional, dado que no existía aún "un riguroso mecanismo de protección legal del niño en esta materia" que impidiera su tráfico y venta.

Señaló entonces, el gobierno nacional, el déficit de la ley internacional en referencia a la protección prevista en el derecho interno. La norma que requiere la residencia fehaciente e indubitable, debe pues merecer todo nuestro apoyo.

El artículo 5º dispone la creación de un registro único de aspirantes a la adopción. La previsión es útil pues tiende a centralizar y unificar todas las solicitudes que se hagan en el territorio de la República. No obstante consideramos que no es conveniente que sea respetado indefectiblemente el orden cronológico de la inscripción, dado que —como expusimos— debe tenerse en cuenta el interés correlacionado de los menores y de los adoptantes y por tanto a cada niño le deben corresponder los mejores padres posibles.

Y eso no se consigue con meros criterios cronológicos, sino con la atención de las características particulares de los adoptantes y del menor. La ley debería consignar que el registro actuara bajo la dependencia del Ministerio Público de Menores. En forma correlativa consideramos que si bien es aceptable el criterio general de que puede ser adoptante toda persona que reúna los requisitos establecidos por la ley cualquiera fuese su estado civil (artículo 6º), la forma debe disponer en forma expresa que tendrán preferencia para el otorgamiento de la adopción las parejas que hayan contraído matrimonio.

Este hecho y el haber fijado un compromiso de recíprocas obligaciones y derechos entre hombre y mujer, da mejor garantía el menor que ha de convivir con ellos. No existe en esto lesión al principio de igualdad ni forma alguna de discriminación. La igualdad constitucional en sustancia consiste en dar igual tratamiento a quienes están en las mismas condiciones. El artículo 12 prevé que el juez deberá valorar "los medios de vida y cualidades morales y personales del o de los adoptantes".

Debería, reitero, incluirse la preferencia por aquellas parejas que han contraído matrimonio válido en el país.

Creo también sustancial como garantía la indicación incluida en el proyecto de que el Ministerio Público de Menores es parte necesaria del juicio de adopción. Ello implica subrayar que el interés del menor es el prevalente.

En este orden de ideas sería sustancial que en todo el país avance la creación de juzgados con competencia específica en materia de familia que darán mayor seguridad al conjunto de problemas que plantea la adopción. El proyecto asume expresamente la importancia de la intervención judicial en todos los aspectos, en diversas previsiones.

En primer lugar dispone, en principio, que el juez debe citar a los progenitores del menor y tomar conocimiento personal del adoptado y de los adoptantes, requiriendo la opinión de equipos técnicos, lo que ratifica la existencia de tres sujetos interesados en el proceso de adopción. Asimismo prohíbe la entrega en guarda de menores mediante escritura pública o acto administrativo.

Esto a la vez evita posibles maniobras inescrupulosas que pueden contar con la eventual participación de funcionarios o profesionales. Reitero que uno de los aciertos sustanciales del proyecto consiste en radicar los procedimientos exclusivamente en sede judicial y descartar las actuaciones administrativas.

Existen dos disposiciones interrelacionadas que valoro expresamente. El artículo 12 inciso h) dispone que "deberá constar en la sentencia que el adoptante se ha comprometido a hacer conocer al adoptado su realidad biológica". Se trata de un compromiso jurídico y moral cuya sanción deberá desarrollar en su oportunidad la jurisprudencia.

Pero tiene un profundo contenido ético que luego ratifica el artículo 19: "El adoptado tendrá el derecho a conocer su realidad biológica y podrá acceder al expediente de adopción a partir de los dieciséis años de edad". Estas dos disposiciones reglamentan el derecho a conocer su identidad que garantiza el artículo 8º de la Convención de los Derechos del Niño incorporada a la Constitución.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, aun antes de esta incorporación, había expresado que "entre los derechos no enumerados debe —sin duda— incluirse el derecho de toda persona a conocer su identidad de origen, poder conocer su propia génesis, su procedencia, es aspiración natural del ser humano, que incluyendo lo biológico lo trasciende". Y agregaba: "Tender a encontrar las raíces que den razón del presente a la luz de un pasado que permita reencontrar una historia única e irrepetible es un movimiento esencial, de dinámica

particularmente intensa en las etapas de la vida en las cuales la personalidad se consolida y estructura" (CS., noviembre 13-1990).

En este mismo sentido merece todo nuestro apoyo la inclusión como causa de nulidad de la adopción el hecho de que aquella hubiese tenido un hecho ilícito como antecedente necesario, que se hace cargo de la realidad desgarrante de los hijos de desaparecidos. El proyecto da flexibilidad al principio al dejar al arbitrio judicial valorar dónde reside el interés superior del menor.

Para finalizar señor presidente, el concepto de familia es uno, inequívoco e inalterable en nuestra comunidad, pero existen instituciones, como la relación paterno filial, que por múltiples razones experimentan mutaciones a través del tiempo.

Este proyecto representa una necesaria actualización de la ley que viene a sustituir y considero que cumple con el objetivo primordial de dar hijos a quienes no los tienen y dar los mejores padres posibles a quienes sufren su falta.